

Seguridad y Estrategia

Anual 1. Año: **2021**. ISSN: 2790-1475



Editor

Licenciado

Alejandro Perugorria

Correctores de Estilo

Magister

Cindy Rocío Domínguez Tello

Magister

Jorge Eduardo de León Gómez

Diseño Editorial y Portada

Magister

Sofía Crystal Posada Dubón

La Revista Académica Anual Seguridad y Estrategia, Número 1, 2021 es una publicación anual, editada en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. 5ta calle 5-61 zona 1, Guatemala, C.A. Teléfono: 502 2496-2900. Página web: <https://www.inees.gob.gt>. Correos electrónicos: info@inees.gob.gt, revista@inees.gob.gt. Editor responsable: Alejandro Perrugoria. ISSN: 2790-1475

La revista tiene como objetivo fomentar en cada uno de los servidores públicos, funcionarios e investigadores independientes, el espíritu de la redacción de artículos que dentro de la línea de la Seguridad de la Nación, enriquezca este compendio de análisis en los campos de la Seguridad y Estrategia, además de permitir la adquisición de conocimientos que serán de utilidad en el desarrollo del trabajo de cada institución que conforma el Sistema Nacional de Seguridad. En caso de hacer referencia a algún trabajo de los acá publicados, deberá citar la fuente y el autor.

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, que no necesariamente coinciden con el INEES. La revista se encuentra en proceso de ser indexada en el sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX).





Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
5ta. calle 5-61 zona 1
www.inees.gob.gt

Sistema Nacional De Seguridad

Doctor

Alejandro Eduardo Giammattei Falla
Presidente de la República de Guatemala

Vicepresidencia de la República de Guatemala

Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX

Ministerio de Gobernación -MINGOB

Ministerio de la Defensa Nacional -MINDEF-

Procuraduría General de la Nación -PGN-

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
-CONRED-

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado -SIE-

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República -SAAS-

Autoridades de las Instituciones de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad

Coronel y Magister

Héctor Ernesto Orellana García
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Coronel y Magister

Jorge Francisco Girón Mendizábal
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Magister

Jorge Mario Recinos Hernández
Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad

Magister

Victor Manuel Rosales de la Roca
Comisión de Asesoramiento y Planificación

Autoridades INEES

Coronel y Magister

Jorge Francisco Girón Mendizábal
Dirección General INEES

Magister

Ingrid Coralia Miranda de Lainez
Dirección de Asesoría Jurídica

Magister

Claudia Victoria García García
Dirección Académica

Licenciado

Marco Antonio González Marín
Dirección Administrativa Financiera

Magister

Carlos Josué Tirado García
Dirección de Informática

Editores

Licenciado

Alejandro Perugorria

Doctora

Ekaterina Kostioukhina

Magister

María Aurelina Figueroa

Doctor

Jorge Antonio Ortega Gaytán

Doctor

Jorge Ruano Estrada

Magister

Juan José Recinos Hernández

Doctor

Carlos Alvarado Barrios

- 07** Editorial
Editorial
- 08** Formulación de la Política Nacional de Defensa 2021–2031
Formulation of the national defense policy 2021-2031
- 18** Importancia de la gobernanza estratégica en las políticas públicas de seguridad
The importance of strategic Governance in public security policies
- 30** La seguridad jurídica. Un importante tipo de seguridad
Legal security. An important type of security
- 44** Inteligencia criminal en Guatemala, un desafío emergente
Criminal intelligence in Guatemala an emerging challenge
- 60** Diagnóstico municipal en gestión integral para la reducción del riesgo de desastres
Municipal diagnosis management for the disaster risk reduction
- 72** Sobre la revista
About the magazine
- 76** Contraportada
Back cover

La revista académica “Seguridad y Estrategia” del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, es una publicación de periodicidad anual cuyo contenido está basado en una serie de artículos inéditos, producto de la investigación académica científica, los cuales han sido debidamente arbitrados por nuestro comité editorial, el que cuenta con participación de investigadores a nivel nacional e internacional.

La revista tiene como objetivo fomentar en cada uno de los servidores públicos, funcionarios e investigadores independientes, el espíritu de la redacción de artículos que dentro de la línea de la seguridad de la nación, enriquezca este compendio de análisis en los campos de la seguridad y estrategia, además permite la adquisición de conocimientos, los cuales serán de utilidad en el desarrollo del trabajo de cada institución que conforma el Sistema Nacional de Seguridad.

Dentro de los artículos que se abordan en la presente edición se encuentra la “Formulación de la política nacional de defensa 2021–2031”. En este se presenta el proceso a través del cual el Ministerio de la Defensa Nacional establece los lineamientos para la generación de la nueva Política Nacional de Defensa, acorde con la evolución política y social del Estado guatemalteco. Dicha política pretende dar continuidad y coherencia a los procesos vigentes, en concordancia con la normativa nacional e internacional, para dar respuesta efectiva y contrarrestar las amenazas y riesgos que afectan al territorio, la población y la soberanía nacional, en forma coordinada y cooperativa con diferentes instituciones del Estado.

Por aparte, el artículo “La importancia de la Gobernanza Estratégica en las Políticas Públicas de Seguridad”, plantea la relación entre la dirección pública de las políticas de seguridad y la capacidad de involucramiento de actores institucionales para evaluar la efectividad de dichas políticas, desde el estudio explicativo del caso de Guatemala, el cual tiene como objetivo la descripción de la situación a partir de una teoría, la identificación de mecanismos causales; además de incorporar los procesos de gobernanza estratégica.

El artículo “La seguridad jurídica, un importante tipo de seguridad”, muestra como este concepto se considera un punto de singular importancia dentro de la misma carta magna, ya que se considera un principio axiológico protegido al más alto nivel de las normas.

Las nuevas tecnologías obligan la actualización de los procesos jurídicos que protegen la información, con lo que se establece la relación del derecho y la tecnología, para beneficio de la sociedad.

En concordancia con lo preceptuado dentro de la seguridad de la nación, el artículo “La inteligencia criminal en Guatemala. Un desafío emergente”, describe los retos de la inteligencia criminal en Guatemala desde su creación, evolución y proyección a futuro. Los resultados obtenidos del análisis centran en presentar el marco legal, avances y aportes para la toma de decisiones en el más alto nivel para enfrentar de forma efectiva los riesgos y amenazas que son provocados por el crimen organizado y la delincuencia común que afectan a la población.

Por otro lado, el artículo “Diagnóstico municipal en gestión integral para la reducción del riesgo de desastres”, aborda la forma en que se realizan las acciones en el área de preparación ante emergencias desde la óptica de la gestión del desempeño municipal, con un enfoque centrado en los procesos de la gestión integral para la reducción del riesgo; la cual presenta información actualizada y necesaria para la implementación de acciones que fortalezcan a nivel municipal, las mismas.

Estimado lector, bienvenido a esta primera edición anual de la revista Seguridad y Estrategia del INEES que fomenta la investigación académica y contribuye a incrementar sus conocimientos en materia de Seguridad de la Nación, la cual es una temática que evoluciona día con día.


Lo exhorto para que junto a nosotros nos convirtamos en modernos actores de cambio, y a través de la investigación, la creación de estrategias y propuestas, podamos ofrecer soluciones oportunas y adecuadas a la realidad nacional, regional y mundial.

El Director,



Coronel y Magister

Jorge Francisco Girón Mendizábal

The background of the page is a dark, blue-tinted photograph. It depicts a military scene with a large vehicle in the foreground, possibly an armored car or a truck. Several soldiers in tactical gear are visible, some standing and others near the vehicle. In the background, there are several tall flagpoles with flags flying. The overall atmosphere is serious and military-oriented.

Formulación de la Política Nacional de Defensa 2021–2031

*Formulation of the National Defense Policy
2021-2031*

A solid red horizontal bar is positioned below the subtitle text.



Fotografía propiedad de Ejército de Guatemala



Formulación de la Política Nacional de Defensa 2021–2031



Coronel de Policía Militar DEM

Juan Emilio Schaad De León

Dirección General de Política de Defensa

Ministerio de la Defensa Nacional

DIGEPOL

estudiosdigepol@mindef.mil.gt

Recibido: 16-07-2021

Publicado: 14-12-2021

Resumen

El Ministerio de la Defensa Nacional ha considerado oportuno formular una nueva Política Nacional de Defensa, que se encuentre acorde con la evolución política y social del Estado.

En este proceso participaron diferentes instituciones, que de forma directa o indirecta se vinculan con las funciones de la Defensa Nacional; asimismo se realizó su socialización, presentando el proyecto y recibiendo retroalimentación de diferentes sectores de la población.

Con esta política se pretende dar continuidad y coherencia a los procesos vigentes, en concordancia con la normativa nacional e internacional, para dar respuesta efectiva y contrarrestar las amenazas y riesgos que afectan al territorio, la población y la soberanía nacional, en forma coordinada y cooperativa con diferentes instituciones del Estado.

Abstract

The Ministry of National Defense has considered appropriate to formulate a new **National Defense Policy**, that is in accordance with the political and social evolution of the State.

Different institutions participated in this process, directly or indirectly linked to the functions of National Defense; Also, the project was socialized, getting feedback from different sectors of the population.

This policy intended to give continuity and coherence to the current process, in accordance with national and international regulations, to provide an effective response and counteract the threats and risks that affect the territory, the population and national sovereignty, in a coordinated and cooperative way between different state institutions.

Palabras Clave

- Estado
- Seguridad
- Desarrollo
- Defensa Nacional

Key Words

- State
- Security
- Development
- National Defense

En el 2021 se cumplen 200 años de la independencia patria y 150 años de la fundación del Ejército de Guatemala, por lo que el Ministerio de la Defensa Nacional considera que es el momento oportuno para formular una nueva Política Nacional de Defensa, en forma cooperativa y coordinada con otras instituciones del Estado, que de manera directa o indirecta y de acuerdo a su mandato se vinculan con las funciones de la Defensa Nacional, y con la participación de diferentes sectores de la población mediante un proceso de socialización.

El término “**seguridad**” se adjetiva de acuerdo con su énfasis, tal es el caso de la seguridad nacional, la seguridad humana, la seguridad multidimensional, la seguridad hemisférica, la seguridad global y la seguridad democrática que desarrolla el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. (Ministerio de la Defensa Nacional, 2005, pág. 5).

La “**Defensa Nacional**” es un conjunto de medidas y acciones destinadas a prevenir y enfrentar distintos tipos de amenazas y riesgos potenciales que vulneren la pervivencia del Estado y atenten contra los objetivos nacionales ya sea permanentes o actuales. (Ministerio de la Defensa Nacional, 2005, pág.6).

El Ejército de Guatemala es una de las instituciones que tiene su misión establecida en la Constitución Política de la República, considerando su importancia en “mantener la independencia, la soberanía, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”, factores indispensables para la subsistencia del Estado.

Este mandato constitucional y la Ley del Organismo Ejecutivo, facultan al Ministro de la Defensa Nacional para formular, dirigir e implementar la Política Nacional de Defensa, cumpliendo con los principios generales del derecho interno y del derecho internacional, en concatenación con la Política Nacional de Seguridad y la Política Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, respetando el estado de derecho, la preservación de la paz y la búsqueda de una solución pacífica a las controversias, así como la cooperación entre Estados.

Para la formulación de esta política se realizaron reuniones de trabajo con diferentes instituciones del Estado; considerando el modelo de políticas públicas establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, llevando a cabo un proceso participativo que inicia con el análisis del marco jurídico y político, relacionado con la seguridad y la defensa nacional, identificando la vinculación de mandatos con otras políticas vigentes en el país.

Posteriormente se efectuaron diferentes análisis de la seguridad a nivel nacional e internacional, identificando un problema principal y otros secundarios, y por ende las causas que los provocan y sus efectos; estableciendo así el objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar, por medio de las acciones coordinadas entre las diferentes instituciones, con el fin de enfrentar las amenazas y riesgos que afectan la seguridad y el desarrollo del Estado y al mismo tiempo reducir sus vulnerabilidades.



Fotografía propiedad de Ejército de Guatemala

Resultados obtenidos

Como parte del proceso se realizó el análisis de la situación de seguridad en el ámbito internacional, habiendo identificado al terrorismo, el narcotráfico y los ciberataques como las principales amenazas para la seguridad de los Estados; asimismo se considera que actualmente existen diferentes modelos de seguridad, entre estos la seguridad humana, que es un concepto nuevo y relacionado directamente con el bienestar de las personas, la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y otros, la ausencia de estos puede provocar una crisis humanitaria en gran escala y migraciones masivas.

En el ámbito regional, se identificó a los grupos del narcotráfico y las pandillas, como las principales amenazas que afectan a los Estados, siendo responsables de un alto porcentaje de homicidios, generadores un ambiente de inseguridad que desmotiva la inversión y limita el desarrollo económico y social. Los fenómenos naturales, las pandemias y epidemias son actualmente el principal riesgo, que concatenados con la vulnerabilidad de la población, provocan desastres, con pérdidas de vidas humanas y daños a la propiedad.

En el ámbito nacional, las principales amenazas y riesgos identificados son los siguientes:

1. Grupos del crimen organizado transnacional:

Se dedican a cometer una serie de actividades ilícitas; como el narcotráfico y actividades conexas, cuya amenaza cubre un amplio espectro de acciones que, en forma real o potencial representa una intromisión en los espacios soberanos principalmente marítimo y aéreo, por medio de vuelos ilícitos y embarcaciones que ingresan al territorio nacional debido al limitado control.

2. Pandillas denominadas maras:

Surgen posteriormente a la finalización del enfrentamiento armado interno y se han ido incrementando con los años, reclutan a jóvenes en situación de vulnerabilidad, crean un clima de inseguridad y temor en la población.

Esto obligó al Estado a emplear las fuerzas militares para su control.

Entre los principales delitos que cometen se pueden mencionar los asesinatos, extorsión a comercios, al transporte, a las empresas e incluso casas particulares, lo cual afecta la economía del país. La mayoría de los líderes de estas pandillas se encuentran recluidos en cárceles públicas; sin embargo, desde esos lugares continúan cometiendo hechos delictivos.

3. Delitos cibernéticos:

Se refiere a las acciones realizadas por uno o varios individuos, sean estatales o no estatales, por medio del ciberespacio; utilizando recursos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin de afectar la disponibilidad, integridad y la confidencialidad de la información digital. La pandemia del COVID-19 obligó al incremento del uso de las tecnologías de la comunicación y de la misma manera se incrementó este tipo de amenaza. Existe el riesgo, que grupos terroristas o criminales puedan utilizar esta modalidad para ocasionar daños en la infraestructura crítica del Estado.

4. Fenómenos naturales:

Por los efectos del cambio climático y otros factores, en los últimos años se incrementaron los huracanes, tormentas tropicales, erupciones volcánicas y otros que combinados con la vulnerabilidad de las personas que habitan en áreas de riesgo han provocado desastres con el resultado de la pérdida de vidas humanas, daños a la salud, bienes públicos y privados; el incremento de los niveles de pobreza. La recurrencia de estos eventos hace necesario que las instituciones del Estado tomen medidas para prevenir los niveles de riesgo y actúen rápidamente atendiendo las consecuencias de los mismos.

5. Daños al ambiente:

Sus efectos se manifiestan en el cambio climático y la contaminación ambiental, principalmente de los recursos hídricos; sus causas principales son el narcotráfico, que destruye los recursos naturales para la construcción de pistas clandestinas, tala inmoderada e ilícita, invasiones de áreas protegidas del Estado, contaminación de ríos y lagos con desechos químicos, ausencia de una cultura de conservación ambiental en la población y de plantas para el tratamiento de desechos sólidos.

Todo lo anterior ha venido destruyendo el hábitat de especies en peligro de extinción, el bienestar de la población y el patrimonio nacional.

6. Pandemias y epidemias:

La manifestación más clara de esta amenaza es la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto a nivel global y nacional, afectando la seguridad y el desarrollo. Su ocurrencia obliga al empleo de todos los recursos del Estado, incluyendo los militares.

7. Limitada gobernabilidad:

Posterior a la finalización del enfrentamiento armado interno, el número de efectivos del Ejército de Guatemala fue reducido y también su estructura en todo el territorio nacional; dejando espacios que fueron aprovechados por grupos de la delincuencia organizada, causando un ambiente de inseguridad e involucrando a la población vulnerable en sus actividades ilícitas. Otro factor es la insatisfacción de la población ante sus demandas sociales, incluyendo la salud y la educación, existiendo diversos focos de conflictividad social, que son aprovechados por diferentes grupos para generar crisis en determinadas regiones del país.

8. Surgimiento de conflictos internos en diferentes regiones del mundo:

En la actualidad existen conflictos internos en países de Asia y África generados por el interés de grandes potencias o grupos transnacionales en los recursos naturales estratégicos existentes en estos países; asimismo conflictos de origen étnico o racial entre diferentes grupos de población, provocando desplazamientos humanos y la pérdida de vidas, afectando principalmente a la población más vulnerable.

Guatemala es parte de la Organización de las Naciones Unidas y esto incluye el cumplimiento de compromisos adquiridos, por ello es indispensable que al realizar el análisis de la seguridad se incluya el estudio de conflictos internacionales que conlleven a la participación del país, para mantener la paz mundial.

Posterior al análisis nacional e internacional de la seguridad y la identificación de las amenazas y riesgos que afectan al Estado de Guatemala, sus causas y sus efectos, se establecieron los ejes que agrupan las acciones estratégicas que se deben realizar en forma coordinada para alcanzar los objetivos establecidos en la política, siendo los siguientes:

El primer eje, **defensa de la soberanía e integridad territorial**, en los espacios terrestre, aéreo y marítimo tiene el objetivo de fortalecer la defensa de la soberanía nacional contrarrestando amenazas de origen transnacional, entre estas el narcotráfico que pretende utilizar el territorio nacional como un puente para el tránsito de drogas ilícitas, considerando también el fortalecimiento de la Ciberdefensa como un medio para proteger la infraestructura crítica del país, reduciendo vulnerabilidades para evitar que sea objetivo de ataques cibernéticos.

El segundo eje, **protección del ambiente y gestión para la reducción del riesgo de desastres**, por medio de acciones realizadas en forma coordinada y cooperativa con diferentes instituciones del Estado, orientadas a la conservación y protección de los recursos naturales afectados por la contaminación ambiental y amenazas como el narcotráfico y la tala ilícita de árboles, entre otras; así como el fortalecimiento de las capacidades de la Defensa Nacional para dar respuesta ante los posibles impactos causados por desastres provocados por la interrelación de fenómenos naturales o antropogénicos y la vulnerabilidad de la población, protegiendo a las personas y sus bienes.

El tercer eje, **gobernanza, seguridad y prosperidad**, tiene como objetivo integrar y fortalecer capacidades de diferentes instituciones para promover la seguridad de la población contrarrestando amenazas a la seguridad interior; a la vez, contribuir al desarrollo nacional a través del empleo de capacidades diferenciadas del Ejército de Guatemala y a la proyección internacional del Estado por medio de la diplomacia militar y la participación en Operaciones de Paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

El cuarto eje, **regulación de los espacios acuáticos**, tiene como objetivo fortalecer los intereses marítimos nacionales, su regulación e infraestructura para ejercer un efectivo control de embarcaciones que navegan en los espacios acuáticos nacionales, cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado y garantizar la seguridad marítima mediante el cumplimiento de legislación nacional, convenios y tratados internacionales, lo que dará mayor confianza para la navegación.

Esta Política Nacional de Defensa, incluye tres ejes transversales necesarios para cumplir las acciones establecidas en los ejes sustantivos, siendo la transparencia, indispensable para obtener la confianza de la población y mantener a la Defensa Nacional como un bien fundamental para preservar la institucionalidad democrática del país y fortalecer las relaciones con otros Estados y Organismos Internacionales.

La **modernización**, considerada un imperativo para el fortalecimiento de las capacidades que permita contar con los medios necesarios para el cumplimiento de los objetivos trazados en los ejes sustantivos; además de constituirse en un elemento disuasivo ante las amenazas y la **cultura de defensa**, generando conciencia en todos los ciudadanos de la importancia de la Defensa Nacional como un bien común y el medio para contrarrestar las amenazas, contribuyendo a mantener un ambiente seguro para el desarrollo del país.

Finalmente, para su coordinación, articulación y evaluación, ésta política considera los planes que permitirán comprobar a corto, mediano y largo plazo el grado de cumplimiento de los objetivos trazados, realizando los ajustes necesarios para su alineación con nuevas políticas que surjan en el futuro, cambios que ocurran en la legislación nacional e internacional o los derivados de la evolución de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que afectan al Estado.

Discusión de Resultados

La seguridad es una condición que se alcanza a través de un conjunto de acciones y medidas que previenen y dan respuesta efectiva a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que afectan a la población, el territorio y la soberanía nacional.

La seguridad se encuentra directamente vinculada con el desarrollo nacional, debido a que es necesario un ambiente seguro para que puedan desarrollar las actividades normales de la población y alcanzar un desarrollo económico y social sostenible.

Anteriormente la seguridad y la defensa nacional, eran consideradas conceptos separados, las amenazas tenían origen externo o interno y eran claramente identificadas, las primeras provenían del exterior principalmente otros Estados y las segundas se originaban dentro del territorio nacional.

Posteriormente con el fin de la guerra fría, inicia la apertura de las fronteras a nivel mundial, surge la globalización y nuevas tecnologías de la comunicación e información, generando grandes cambios a nivel mundial y nuevas amenazas.

Ante el surgimiento de las amenazas actuales, que son transnacionales y evolucionan constantemente manifestándose de diferentes maneras, se hace necesario que el Estado haga uso de todos los recursos a su alcance, para mantener la condición de seguridad que permita el desarrollo económico y social del país; además de cumplir con la finalidad de proteger a la población.

El Ministerio de la Defensa Nacional en cumplimiento al mandato constitucional y en uso de las facultades que le corresponden, en coordinación con otras instituciones del Estado y diferentes sectores de la población ha formulado una nueva Política Nacional de Defensa, acorde con la situación internacional y nacional vigente, que contiene lineamientos generales, ejes y acciones que se deben realizar con el

propósito de contrarrestar en forma eficiente y efectiva las amenazas y riesgos que afectan al Estado en sus expresiones de territorio, población y soberanía nacional, en el marco del Estado de Derecho y considerando los convenios internacionales vigentes de los que Guatemala es parte, asimismo para elaborar esta política se consideró el modelo establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para estar acorde con la planificación estratégica del Estado, alineando, presupuesto con resultados, que impacten directamente en beneficio de la población y con la planificación estratégica de otras instituciones del Estado, integrando esfuerzos en forma coordinada y cooperativa.

Conclusiones

La seguridad del Estado puede ser obstaculizada por fenómenos y acontecimientos que afectan la población, el territorio y/o la soberanía nacional, en todos los casos el sujeto, la organización, el Estado o fenómeno se constituye en un riesgo o una amenaza para los elementos constitutivos del Estado, siendo una limitante para el desarrollo económico y social del país.

Cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades de seguridad y defensa nacional, definir las políticas, estrategias y planes para hacer frente a las amenazas y riesgos a su seguridad; asimismo tomar las medidas para reducir las vulnerabilidades, por lo que el Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con otras instituciones del Estado y diferentes sectores de la población, ha formulado una nueva Política Nacional de Defensa estableciendo las acciones que permitirán cumplir con su mandato constitucional y contribuir a generar un ambiente de seguridad para el desarrollo económico y social de la población y del país.



Fotografía propiedad de Ejército de Guatemala

Referencias Bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyente (1986), Constitución Política de la República, Guatemala.
- Ministerio de la Defensa Nacional (2005), Política de Defensa Nacional de la República de Guatemala, Guatemala.
- Ministerio de la Defensa Nacional (2013), Política de Defensa de la Nación, Guatemala.
- Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (2017), Política Nacional de Seguridad, Guatemala.
- Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (2017), Guía para Formulación de Políticas Públicas.



Juan Emilio Schaad de León, Coronel, egresado de la Escuela Politécnica; se ha desempeñado en diferentes cargos operativos y administrativos. Posee una Licenciatura en Administración de Recursos Humanos y Tecnología de la Universidad Francisco Marroquín.



Copyright (c) Juan Emilio Schaad De León





Importancia de la Gobernanza Estratégica en las Políticas Públicas de Seguridad

*The Importance of Strategic Governance in Public
Security Policies*



Fotografía propiedad de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad



Importancia de la Gobernanza Estratégica en las Políticas Públicas de Seguridad



Joselyne Sarg Bonilla

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala.

Subdirectora de Política.

jsarg@stcns.gob.gt

Recibido: 14-07-2021

Publicado: 14-12-2021

Resumen

El presente ensayo aborda la importancia de la gobernanza estratégica en las políticas públicas de seguridad.

En el debate de fondo, se plantea la relación entre la dirección pública de las políticas de seguridad y la capacidad de involucramiento de actores institucionales para evaluar la efectividad de dichas políticas.

Se parte del estudio explicativo del caso de Guatemala, el cual tiene como objetivo la descripción de la situación a partir de una teoría, la identificación de mecanismos causales; además de incorporar los procesos de gobernanza estratégica.

Abstract

This essay addresses the importance of strategic governance in public security policies.

In the substantive debate, the relationship between the public direction of security policies and the capacity for involvement of institutional actors to evaluate the effectiveness of those policies.

It starts from the explanatory study of the case of Guatemala, which aims to describe the situation from a theory, the identification of causal mechanisms; in addition to incorporating strategic governance processes.

Palabras Clave

- Política Pública
- Seguridad
- Gobernanza Estratégica
- Planificación Estratégica
- Administración Pública

Key Words

- Public Policy
- Security
- Strategic Governance
- Strategic Planning
- Public Administration

Desarrollo del Estudio

Durante los últimos años la seguridad se ha convertido en una de las demandas más importantes de los ciudadanos que reclaman resultados tangibles por parte del Estado en brindar este servicio.

El Estado para poder satisfacer la problemática de seguridad, se basa en las políticas públicas; las cuales, para su desarrollo, requieren de la organización de los sistemas de actores que intervienen en su aplicación, y que representan la expresión de los modos de gobernación en que se insertan.

Bajo ese contexto, en la administración pública, llegan a coexistir diferentes formas de gobernación en el que una de ellas adquiere un papel dominante. En ese sentido, una política pública permite responder a un nuevo modo de gobernación, el cual conlleva necesariamente un cambio de paradigma y del rol que los actores llegan a ejercer, y en especial el rol de la administración pública de un determinado sector.

A partir de esta premisa el desarrollo de una política pública, conlleva un cambio sustancial del papel de la administración y de otros actores de un determinado sector, debido fundamentalmente al cambio de rol de la administración, la cual se transforma en proveedora de recursos, en gestora de acciones con actores institucionales y sociedad civil.

Este proceso de cambio, genera importantes desajustes en el rol esperado de los actores, por lo que la gobernanza estratégica, es el elemento que permite comprender el rol que efectivamente llega a desarrollar determinada administración pública y busca que los procesos interrelacionados que existen en el actuar de un sector, funcionen de manera coherente, dentro de un marco temporal, permitiendo controlar la ejecución de las acciones de cada uno de los actores que intervienen, así como el ajuste en los procesos que se considere necesario.

El problema que motiva el desarrollo de este artículo es la nueva realidad que enfrenta el Estado de Guatemala en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas específicamente en el sector seguridad y cómo la gobernanza estratégica contribuye a generar coherencia.

Para determinar lo anterior, se realiza una metodología de estudio de caso, la cual tiene como objetivo la descripción de la situación, la explicación de un resultado a partir de una teoría, la identificación de mecanismos causales” (Yacuzzi, 2005, p. 3).

En consecuencia, este estudio se basa en un estudio (explicativo) de caso, puesto que, “viene de la teoría y va hacia ella”. (Yacuzzi, 2005, p. 9).

La metodología de caso cualitativa permitirá entender la dinámica de la política pública y el cambio en las relaciones entre los actores, en especial la administración pública en la configuración de las distintas fases de la política pública.

La teoría utilizada es el marco Institucional Analysis and Development (IAD), promovida por el analista Elinor Ostrom, la cual se constituye uno de los marcos analíticos que explora las estructuras institucionales en el manejo de recursos, equilibrando el uso de los individuos con el interés de un público más amplio.

El IAD busca explicar y predecir resultados de una política pública mediante la exploración y documentación formal de las estructuras de gobernanza, las posiciones de los actores y las reglas formales e informales. Por tanto, el IAD es un método sistemático para documentar funciones de análisis de políticas públicas para comprender cómo operan y cambian las instituciones durante un período de tiempo.

Se destaca que en el IAD, las instituciones son utilizadas por los seres humanos para organizar todo tipo de interacciones repetitivas y estructuradas (Ostrom, 2005, p.3), que pueden incluir reglas, normas y estrategias compartidas. De esta manera, las instituciones son normas formales e informales: las primeras, caracterizadas por las leyes o normas de carácter coercitivo-coactivo; y las segundas, como reglas en uso, basadas en la costumbre y los modos de proceder (Ostrom, 1991).

En otras palabras, esta teoría permite profundizar el estudio de las instituciones, permitiendo entender cómo se diseñan y operan las normas, las estrategias, ya sea que sean implícitas o no, de las interacciones entre los seres humanos; en este caso, los actores involucrados en la política pública.

El marco de análisis de la política pública de seguridad en Guatemala

Las políticas públicas se estudian a partir de las fases de elaboración, implementación y evaluación como una responsabilidad exclusiva de la administración pública, así como también se estudian a través en los impactos sociales, económicos e institucionales que puede tener dicha política, y también se pueden estudiar a partir de los aspectos estructurales y/o en las redes de conflicto y colaboración entre actores que se encuentran en el origen, formulación, gestión y evaluación de la política pública.

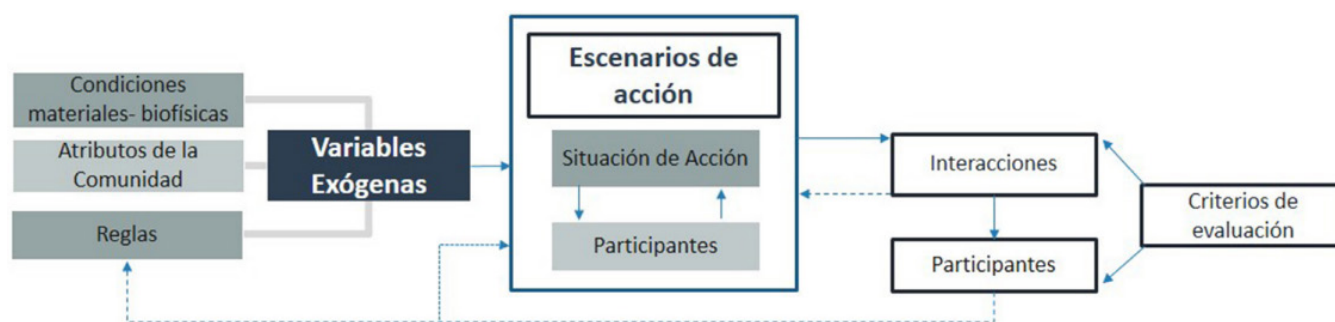
Desde la perspectiva del marco de IAD, se establece que toda interacción de los individuos con las instituciones u organizaciones sucede en una unidad que se denomina lugar, arena o espacio de acción.

Dichas interacciones se ven afectadas por variables exógenas y producen resultados que tienen efecto tanto para los participantes y las situaciones de acción (Ostrom, 2005).

Así mismo, los sucesos que ocurren en dichas interacciones, tienen un margen de flexibilidad para la interpretación de dinámicas institucionales dadas en marcos normativos formales o informales.



Gráfica 1. Marco de análisis y desarrollo institucional (IAD)



Fuente: Ostrom (2005:15)

La gráfica 1, permite detallar los elementos del escenario de acción propuesto por la teoría IAD. Del lado izquierdo se pueden observar las variables exógenas que influyen sobre el escenario de acción.

Dentro del escenario de acción se encuentran: la situación de acción y los participantes de dicha situación.

Del escenario de acción surgen las interacciones con los participantes involucrados de un sector, los cuales, al interactuar generan resultados; que posteriormente pueden producir cambios en las variables exógenas y en el escenario de acción.

Sobre esta premisa, para el estudio de este artículo se analiza el caso de Guatemala a través de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad del año 2008 y su implementación como variable exógena.

Se analiza los escenarios de acción, los cuales pueden corresponder a cualquier dinámica relacional, en la cual, personas, grupos, instituciones u organizaciones interactúan sobre reglas, toman decisiones y describen disputas políticas.

Para ello, se analiza al Sistema Nacional de Seguridad, como el conjunto de instituciones cuya misión y funciones se desenvuelven dentro del ámbito de la seguridad. Las que, a través de la coordinación interinstitucional, buscan lograr una considerable reducción sostenible de los indicadores de inseguridad; ofreciendo con ello, las condiciones básicas de seguridad para la población y el Estado.

El Sistema Nacional de Seguridad, tiene como autoridad máxima al Consejo Nacional de Seguridad; quien lo conduce, coordina e integra las interacciones de los componentes del Estado guatemalteco que son responsables de la seguridad, junto con otros actores estratégicos, tanto nacionales como extranjeros, tienen la finalidad de definir las políticas y estrategias en materia de seguridad con el propósito de proveer estabilidad y desarrollo al país, con base a un planeamiento estratégico-operacional y prospectivo, para poder atender de modo integral la agenda de seguridad.

La complejidad de la problemática de seguridad, demanda instrumentos de coordinación que permitan reducir las insuficiencias y la fragmentación y proliferación de agencias que se observa en la estructura sectorial.

Sobre esa base, en el año 2017, se establece la Política Nacional de Seguridad, como la actual política pública de seguridad con la que cuenta el Estado de Guatemala, para fortalecer las capacidades y actuaciones de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, y generar con ello, no sólo la adecuada actuación interinstitucional, sino también la efectividad de sus aportes individuales y responsabilidades.

En ese sentido, el abordaje de la seguridad en Guatemala, sufrió profundas transformaciones tanto en su contenido como en su aplicación. Principalmente porque fortaleció la elaboración de una visión prospectiva y una orientación de planificación estratégica, basadas en el análisis de los escenarios previsibles y el impacto que pueden llegar a tener en la realidad del país; orientando con ello, las acciones de los actores públicos y privados, en relación a los objetivos estratégicos sectoriales por alcanzar.

Específicamente la Política Nacional de Seguridad, se centra en los aspectos estructurales y/o en las redes de conflicto y colaboración que se dan entre actores y que se encuentran en el origen, formulación, gestión y evaluación de la política pública.

Estos elementos conforman los ingredientes para que surja una situación de acción, donde los participantes toman decisiones, y "con preferencias diversas interactúan, intercambian bienes y servicios, solucionan los problemas, se dominan entre sí, o pelean, entre otros (comportamientos)". Esto sucede cuando las acciones de dos o más actores producen resultados colectivamente (Ostrom, 2005:14-32).

Los resultados de la acción o la elección de los participantes no dependen solo de parámetros, sino que además dependen de que otras personas actúen y de las expectativas que cada uno tenga sobre lo que van a hacer los demás (Benedetti, 2017:145).

Cabe mencionar, que la Política Nacional de Seguridad, genera formas de interacción obligando a establecer una adecuada cadena procesal basada en una planificación estratégica sectorial e institucional; que, sustentada en una coherente ejecución presupuestaria, permite alcanzar los resultados deseados en el ámbito de la seguridad y a la vez permite, la eficacia de la acción del Estado en materia de seguridad y la participación ciudadana.

En ese sentido, la planificación estratégica sectorial, está fundamentada en la “Estrategia de Seguridad de la Nación”, la cual está conformada por tres instrumentos: *la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación*.

Estos documentos en conjunto, definen los objetivos y cursos de acción del Sistema Nacional de Seguridad, así como la alineación de sus resultados, para alcanzar niveles superiores de seguridad. Bajo esta concepción, una de las características más destacadas, es que dicha estrategia trasciende lo conceptual, ya que permite reflexionar sobre la planificación, por medio del ejercicio de análisis prospectivo, para responder a la necesidad de una planificación más adecuada para orientar mejor las acciones del Sistema Nacional de Seguridad.

La comprensión de factibilidad de ocurrencia de determinados escenarios, permite identificar cuáles son esas atribuciones que debe tener el Estado en materia de seguridad, para consolidar su accionar en forma proactiva, y lograr extender beneficios hacia la ciudadanía.

En ese sentido, el análisis de la Política Nacional de Seguridad, en conjunto con la Estrategia de Seguridad de la Nación, permite comprender el rol que los actores llegan a ejercer en el sector seguridad.

El análisis de las reglas, los cambios en los escenarios de acción y cómo estos afectan los resultados e interacciones del sector seguridad. Y el impacto de las reglas sobre los resultados obtenidos.

La gráfica 2, permite apreciar la puesta en práctica de los elementos del AID al definir la estructura de la arena de acción y predecir resultados, específicamente aplicados al Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala.

Este escenario desde una aproximación analítica orientada a Guatemala, destaca la importancia de la institucionalidad creada para favorecer los procesos de interacción entre las distintas instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, respetando las reglas, generando así procesos que contribuyen al desarrollo del sector seguridad utilizando procesos de gobernanza.

La importancia de la gobernanza estratégica en las políticas públicas de seguridad

Las características de la institucionalidad y las reglas establecidas en materia de seguridad en Guatemala, influyen en la toma de decisiones colectivas y los procesos de política pública respecto al bien común.

En ese sentido, la influencia de la gobernanza sobre las políticas públicas de seguridad, radica alrededor de la forma en que los gobiernos definen la planificación y la organización en los últimos años.

La gobernanza como concepto, ha sido definido de varias formas por diversos autores para evidenciar principalmente la eficacia, calidad y una correcta orientación de la intervención del Estado en los temas públicos, para asegurar la gobernabilidad de las democracias en nuestro tiempo. (Prats, 2001).

Desde esta perspectiva, la gobernanza se caracteriza por estructurarse de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales, que pueden registrar diversos niveles de institucionalización, dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias. (Prats, 2005:103-104).

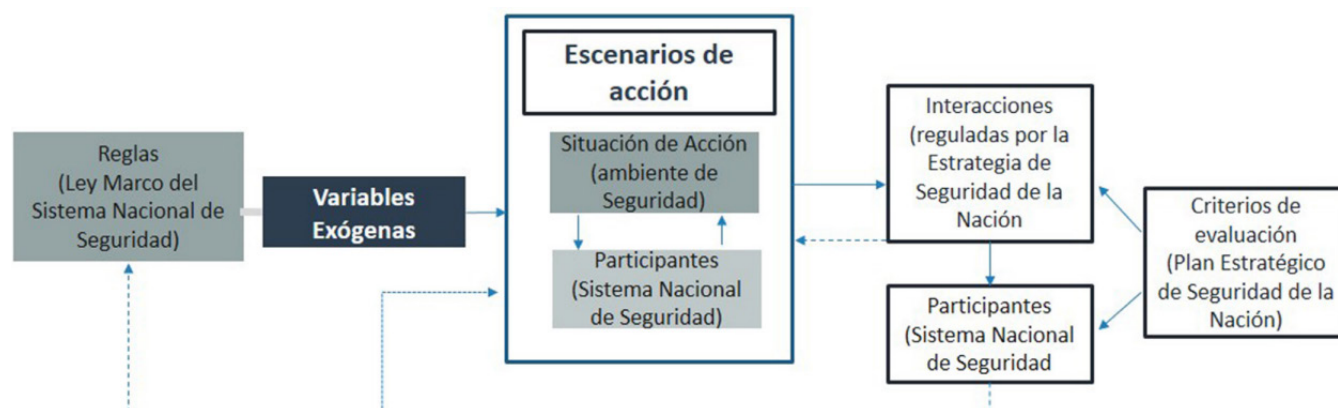
Específicamente, en materia de seguridad, la institucionalidad guatemalteca ha sido débil e inestable en brindar las condiciones suficientes y apropiadas de seguridad para la población. Aunado a ello, los procesos y mecanismos político organizacionales de decisión, han resultado ser complejos y burocráticos; y a la vez no han permitido que el Estado pueda actuar con la agilidad requerida para adaptar las capacidades necesarias en las áreas de mayor impacto.

Reducir esas brechas y subsanar las rupturas en la cadena de procesos del Sistema Nacional de Seguridad, es el desafío de la implementación de la Política Nacional de Seguridad, para que se generen condiciones que potencialicen a las instituciones desde seguridad y lograr generar mejores resultados en beneficio de la población guatemalteca.

No obstante, al actualizar la Política Nacional de Seguridad, se establece el “Modelo de seguridad de la nación, gobernanza integral”, el cual se implementa por medio de tres grandes programas. Programa estratégico 1. Gestión integral de seguridad de la nación, 2. Programa estratégico para la } efectividad de la gobernanza local (GOBLOC); y el programa estratégico orientado a la promoción de la seguridad para el desarrollo (SEGDE) (Política Nacional de Seguridad, 2017:23).

El objetivo del primer programa es contribuir a fortalecer las capacidades de gestión y cooperación interinstitucional tanto a lo interno como externo. Es decir, la actuación interna del Sistema Nacional de Seguridad contribuye a la gestión de recursos, planificación, gestión presupuestaria, transparencia, metodología de gestión por resultados, y a la mejora de los procesos en la toma de decisiones para dar mejor respuesta a la seguridad.

Gráfica 2. Marco de análisis y desarrollo institucional (IAD), aplicado al Sistema Nacional de Seguridad



Fuente: Elaboración propia, con base a Ostrom (2005:15).

Resultados Obtenidos

La actuación externa, referida a la interacción de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, con otras instituciones y sectores del Estado por medio de mecanismos de colaboración, coordinación y cooperación (Política Nacional de Seguridad, 2017:24).

Bajo el contexto de orientación y articulación generada a través del Modelo de Seguridad de la Nación, se establece un camino apropiado a seguir para poder alcanzar una solución estable, presentando posibilidades claras de éxito, el cual está enfocado ampliamente en la gobernanza estratégica.

En ese sentido, la aplicación ha sido importante, porque permite asegurar que los actores institucionales tengan el mismo entendimiento de todos esos elementos. De esta manera, permite generar una mejor ejecución de los procesos para evitar errores y duplicidad de acciones, y exista una mejor atención de los fenómenos que atentan a la seguridad del país.

Los actores institucionales de la Seguridad de la Nación; es decir el Sistema Nacional de Seguridad, al organizarse con una visión estructural y a la misma vez dinámica, actúan coherentemente con el propósito de crear impactos a largo plazo. Con una visión estructural; porque respetan las normas y procesos propios de las instituciones; y dinámica, porque sus acciones evolucionan hacia los objetivos de la Seguridad de la Nación.

Con base al marco IAD que se sustenta en el análisis de las reglas, es decir las variables exógenas, se puede entender cómo éstas logran generar los cambios en los escenarios de acción.

Según el IAD, las reglas afectan los resultados e interacciones, gracias a su influencia en los procesos de toma de decisión en las situaciones de acción. Considerar esos elementos, permite comprender con mayor precisión los sucesos llevados a cabo en un escenario específico y el impacto de las reglas sobre los resultados obtenidos.

La lección más importante encontrada para el análisis de políticas públicas, desde el IAD, es que para resolver una problemática social, los seres humanos crean estructuras, que de manera categórica surge la necesidad de crear mecanismos de coordinación y apropiación de los recursos por parte del Estado de un determinado sector.

Con base a la teoría estudiada, se destaca la necesidad de comprender que la creación, la adaptación, el diseño y los efectos de las interacciones institucionales para resolver una problemática social y alcanzar resultados por medio de una política pública.

Bajo el IAD, en la explicación de la seguridad y el rol de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, se reconoce la importancia de los modos de gobernanza ejercidos a través de la Política Nacional de Seguridad, porque inciden en el accionar institucional y éste en los procesos que permiten reducir o aumentar las externalidades en el Sistema Nacional de Seguridad.

Conclusiones

La aportación principal de este ensayo, consiste en enfatizar que la gobernanza estratégica ha dejado de ser sólo una categoría analítica, pues ha adquirido un carácter normativo, por lo que se le emplea para hacer valoraciones objetivas y subjetivas sobre el desempeño de la gestión de las políticas públicas y de los asuntos públicos.

Específicamente en el caso de Guatemala, se determina que gran parte de los desafíos radican principalmente en la relación de los actores estratégicos que intervienen en seguridad y los espacios institucionales de relación que se dan entre éstos, en donde las reglas formales e informales que rigen la relación, son determinantes para la gobernanza estratégica, porque de esta manera se evita la duplicidad de esfuerzos y se crea una armonía en los procesos del sector seguridad para poder brindar resultados más efectivos.

Ciertamente la discusión permite evidenciar que la planificación estratégica y prospectiva de la administración, pública vinculada a la gobernanza, pueden brindar una oportunidad para reconocer las brechas existentes y potenciar el que hacer futuro del sector seguridad.

La gobernanza estratégica, resulta relevante como concepto y marco analítico para entender y afrontar los procesos, retos y perspectivas de la sociedad actual.

Así mismo, el dinamismo y multidimensionalidad del enfoque de gobernanza estratégica, llega a tener una influencia no sólo en el ámbito académico y profesional, sino principalmente para orientar más acertadamente las actividades de la vida pública en general.

En definitiva, el análisis de la gobernanza estratégica implica un fundamento teórico, así como un impacto en las ideas, valores, comportamientos, instituciones y organizaciones de una sociedad y una para el diseño de políticas públicas de una problemática específica y permite disponer de una capacidad predictiva y anticipatoria frente a futuras crisis, de cualquier naturaleza.



Fotografía propiedad de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Referencias Bibliográficas

- Benedetti, Álvaro (2017). "El marco de análisis y desarrollo institucional (IAD), una herramienta de análisis de políticas públicas. Estudio del caso Agro Ingreso Seguro (AIS)". Estudios Políticos, (50), 138-158. [Fecha de Consulta 25 de Junio de 2021]. ISSN: 0121-5167. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16449788008>
- Consejo Nacional de Seguridad. (2017). "Política Nacional de Seguridad". Guatemala: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
- Córdova Montúfar, Marco (2018). "Gobernanza y políticas públicas. La seguridad ciudadana en Bogotá y Quito". Quito, Bogotá: FLACSO Ecuador, Universidad del Rosario.
- "Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad", Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República. Guatemala: Diario de Centroamérica, 15 de abril de 2008.
- Roth, André-Noël. (2008). "Perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico?". Estudios Políticos, 33, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 67-91.
- Ostrom, Elinor. (1991). "A Framework for Institutional Analysis. Working Paper. Workshop in Political Theory and Policy Analysis". Indiana University
- Ostrom, Elinor. (1999). Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework. En: Sabatier, Paul A. (Ed.). "Theories of the Policy Process". (pp. 35-72). Boulder: Westview.
- Yacuzzi, Enrique (2005). "El estudio de caso como metodología de investigación: Teoría, mecanismos causales, validación". Volumen 1. Universidad del CEMA, CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo



Joselyne Sarg Bonilla es la actual subdirectora de Política en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar. Además, tiene una maestría en Altos Estudios Estratégicos con Especialidad en Seguridad y Defensa en la universidad Mariano Gálvez.



Copyright (c) Joselyne Sarg Bonilla



Seguridad Jurídica, un Importante tipo de Seguridad

Legal Security. An Important type of Security





Fotografía propiedad de Ekaterina Bolovtsova

Seguridad Jurídica, un Importante tipo de Seguridad



Hiram Sean Urrutia Gramajo
Comisión Presidencial de Gobierno
Abierto y Electrónico GAE
hiram.urrutia@transparencia.gob.gt

Recibido: 21-07-2021
Publicado: 14-12-2021

Resumen

Para el Estado de Guatemala la seguridad es un aspecto considerado desde la misma Carta Magna, es un principio axiológico protegido al más alto nivel de las normas. Pero el devenir de la sociedad exige cambios y adaptaciones jurídicas, y esto aunado al avance de la tecnología, han formado una relación que nos permite el uso de una en beneficio de la otra y por ende para la sociedad.

Se tiene claro que coadyuvar con la mejora de la seguridad en todas las ramas es una prioridad y la tecnología presenta grandes ventajas, es por ello que desde un punto de vista académico y de observación se realiza la presente investigación sobre el tema de la seguridad jurídica de los documentos e instrumentos públicos digitales.

Abstract

For the State of Guatemala, security is an aspect considered from the Constitution, it is an axiological principle protected at the highest level of the norms. But the evolution of society demands legal changes and adaptations, and this along with the advancement of technology, have formed a relationship that allows us to use one for the benefit of the other and therefore for society.

It is clear that contributing to the improvement of security in all branches is a priority and technology offers great advantages, which is why from an academic and observational point of view this research is carried out on the subject of legal security of digital public documents and instruments.

Palabras Clave

- Seguridad Jurídica
- Firma Electrónica Avanzada

Key Words

- Legal Security
- Advance Electronic Signature

La seguridad es un aspecto sumamente importante desde puntos de vista tan diversos como el territorial, personal y jurídico. Existen muchos tipos de seguridad y por ello la investigación y discusión de estos temas son importantes y de gran impacto en cada una de las ramas de la vida.

Sabemos de la seguridad jurídica que los instrumentos público-notariales ofrecen en su formato en papel, pero cuando nos pasamos al campo de los documentos digitales la situación de la seguridad jurídica puede ser no ser muy clara y es entonces la motivación para su estudio, discusión y propuestas, como es el caso de la presente investigación.

Resumen

Para el Estado de Guatemala la seguridad es un aspecto considerado desde la misma carta magna, es un principio axiológico protegido al más alto nivel de las normas. Pero el devenir de la sociedad, por lo tanto del derecho y el avance de la tecnología han formado una relación que nos permite el uso de una en beneficio de la otra y por ende para la sociedad.

Se tiene claro que coadyuvar con la mejora de la seguridad en todas las ramas es una prioridad y la tecnología presenta grandes ventajas, es por ello que desde un punto de vista académico y de observación se realiza la presente investigación sobre el tema de la seguridad jurídica de los documentos e instrumentos públicos digitales.

I. Marco Histórico

En el devenir del tiempo, desde que el hombre habita la tierra, ha experimentado diferentes necesidades; desde las más básicas, como las fisiológicas, hasta las más complejas como la Autorrealización, como lo indica Maslow en su conocida pirámide de las necesidades humanas.

En la citada pirámide, se clasifica a un grupo de necesidades en un segundo nivel y son las que se denominan como "Seguridad". Dentro de las necesidades de seguridad encontramos las siguientes: La seguridad física, de empleo, recursos, familiar, de salud y de propiedad, entre otras.

De la necesidad de sentirse seguro y protegido, la sociedad ha tenido grandes desarrollos, pues desde sus unidades más básicas, como lo son la gen y el clan, ha habido individuos que se han hecho cargo de las mismas, creando rudimentarias técnicas de vigilancia y defensa, que al mismo paso de la evolución de la sociedad, se han vuelto cada vez más complejas pues se han transformado en temas como la seguridad individual de los ciudadanos, la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

Debido lo anterior, podemos ver que el hombre ha desarrollado diferentes comportamientos, herramientas y formas para satisfacer la necesidad de seguridad.

En la presente investigación intentaremos discutir acerca de un tipo seguridad de importancia nacional en particular y es: la seguridad jurídica apoyada en la tecnología.

Generalmente cuando pensamos en seguridad nacional o territorial, la milicia nos viene inmediatamente a la cabeza, y es natural, pues hemos sido enseñados que el ejército, para el caso de Guatemala y otros países, es el encargado de velar por la seguridad y defender la soberanía del país; de lo anterior también pensamos en el armamento y esto conlleva a pensar en armas cada vez más desarrolladas y apoyadas en la tecnología.

No es algo fuera de lo común el pensar en satélites, drones y otras herramientas que sirvan de apoyo para defender nuestras fronteras de peligros extranjeros.

Los países más avanzados cada vez invierten más tiempo y recursos en el desarrollo de tecnología y se escucha el término de carrera armamentista, "que se refiere a la situación en la que muchos países o Estados rivalizan entre sí para desarrollar fuerzas armadas más poderosas y las armas más letales." (Carrera armamentista, s.f.).

En la misma línea, cuando se piensa en la seguridad que el Estado da a través de sus diferentes Instituciones como la Policía Nacional Civil, como ente encargado; ellos hacen uso de la tecnología para brindarle seguridad al ciudadano, por ejemplo, el uso de radiofrecuencias, cámaras de vigilancia para prevenir el delito y la determinación de zonas más riesgosas para que los ciudadanos estén alertas al transitar por dichas zonas.

No obstante, lo anterior, el papel del derecho es parte importante e innegable en la historia, no solamente como la principal fuente creadora de leyes, si no de cómo es necesario para que los seres humanos podamos vivir tranquilos en sociedad la cual es una organización dinámica, cambiante y adaptable.

Debido a esa naturaleza cambiante, el derecho se hizo necesario para establecer normas para que todos esos fines, objetivos y contratos establecidos entre las personas que forman la sociedad, fueran ley entre las partes contratantes y oponibles a los demás miembros de la sociedad, dando seguridad a las personas que intervienen en los negocios y contratos, pero no una seguridad física, si no una seguridad jurídica, pilar importante para vivir tranquilos en sociedad.

La palabra hablada, en el transcurso de los tiempos, ya no fue suficiente para ser observada por todos los miembros de la sociedad debido a que ella aumentaba rápidamente en su número y con la utilización de la palabra escrita, las sociedades alrededor del mundo dieron un salto vertiginoso usándola para preservar no solamente su conocimiento sino también sus contratos y la manifestación de sus voluntades, estando presente entonces la función notarial para dar seguridad jurídica a los contratos.

En todos los pueblos, naciones y lenguas han surgido diferentes figuras que fueron investidas por las costumbres y/o leyes para ejecutar la función notarial, desde formas muy simples y elementales como el hecho de hacer solamente manuscritos, hasta instituciones jurídicas bien desarrolladas y complejas con instituciones jurídicas vivas y aplicables hasta nuestros tiempos. No nos detendremos a explicar la función notarial a lo largo de la historia por no ser la intención de la presente investigación, pero sí diremos que la función notarial ha estado presente en las diferentes culturas como los egipcios, los hebreos y los romanos entre muchos otros.

Como se evidencia en la historia, el notariado y por ende el notario surgieron como una respuesta a la necesidad de preservar esos escritos, dar legalidad tanto de forma como de fondo, y certeza jurídica a los mismos. Guatemala, no fue la excepción y desde el tiempo de la Colonia, existieron funcionarios como los escribanos, que eran un pequeño número de personas, investidas con suficiente autoridad para realizar instrumentos públicos en donde se plasmaron actos y contratos usando las leyes aplicables a las colonias españolas.



Fotografía propiedad de Guatemala.com

El 10 de diciembre del año 1946, se promulgó el Decreto Número 314 del Congreso de la República de Guatemala, el cual entró en vigor el uno de enero de 1947 y es nuestro actual Código de Notariado. No está demás decir que este Código no ha tenido mayores modificaciones o actualizaciones desde su promulgación y entrada en vigencia, pero se ha visto afectado por la entrada en vigencia de nuevas normas las que de manera tácita han derogado parcialmente algunos artículos, como es el caso del papel sellado y la cédula de vecindad que aunque se mencionan en el código de notariado fueron sustituidos por papel bond (Art. 5 Numeral 6, de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos) y Documento Personal de Identificación (Art. 103 del Decreto 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Registro Nacional de las Personas) respectivamente los ciudadanos pensamos en la Policía como ente encargado.

II. Marco Conceptual

Veamos ahora algunos conceptos importantes sin profundizar demasiado en ellos, y mencionaremos entre ellos: El Derecho Notarial, el Instrumento Público, Protocolo y Protocolo Electrónico y la Función Notarial, y la seguridad jurídica. No se puede hablar de uno de los elementos anteriores sin que necesariamente el pensamiento nos lleve a los otros.

Se entiende como seguridad jurídica, a ese principio del derecho por medio del cual, el individuo conoce y comprende sus derechos, obligaciones y los efectos legales al no cumplir con ellos. Dicho en pocas palabras el individuo sabe que va a pasar.

El derecho notarial, en el Tercer Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en París, Francia en 1954, se estableció que "Es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial". (Muñoz, 2004, p. 23).

El notariado, según lo define el Instituto Guatemalteco de derecho notarial es: "una función noble que se realiza con estricto apego a los postulados éticos y a las normas legales, ya que los notarios con su actuar contribuyen a la paz y al desarrollo económico y social de los países, y a fortalecer la seguridad jurídica en las sociedades." (Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, n.d.).

El instrumento público, según el autor Enrique Giménez Arnau, lo define como "Documento Público autorizado por Notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos". (Gimenez Arnau, 1976, p. 403).

El código de notariado (Decreto 314 Código de Notariado, 1947) no da una definición del Instrumento público, el artículo 29 se limita a enumerar el contenido y las formalidades de los instrumentos públicos y que son los requisitos esenciales que deben observar los instrumentos públicos protocolarios: mientras que en el artículo 30 enumera las formalidades esenciales de los instrumentos públicos.

La función notarial, según la Unión Internacional del Notariado -UIN1-, se refiere a "La función notarial es una función pública, por lo que el Notario tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de forma imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios del Estado." (Unión Internacional del Notariado, n.d.).

El abogado por otra parte es un profesional del derecho con una función diferente. El Diccionario de la Real Academia Española lo define en primera acepción como "Licenciado en derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los procedimientos administrativos". (Real Academia Española, s.f.).

Es importante indicar que en Guatemala el profesional del derecho se refiere en forma indistinta al Abogado y al Notario, situación que no es así en la gran mayoría de los otros países en donde hay una clara distinción y división de las funciones que cada uno realiza.

La Unión Internacional del Notariado establece que “El Notario es un profesional del derecho, titular de una función pública, nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar a los requirentes de sus servicios.” (Union Internacional del Notariado, n.d.).

De conformidad con el Artículo 1 del Código de Notario, establece que “El Notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte”.

Existen muchas definiciones del instrumento público, pero siempre se relacionan con el notario que lo autoriza. Tomaremos la que da Carlos Emérito González aportada por Miguel Fernández Casado “Es el documento notarial autorizado a instancia de parte, en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho” (Muñoz, 2004, p. 2). El Código de Notariado no da una definición de instrumento público. Respecto al protocolo notarial, el código de notariado, en el Artículo 8, encontramos la siguiente definición: El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley.

En la actualidad el avance de la tecnología y el uso de la misma, ha hecho común el uso del fotocopiado, el escaneado, el uso del OCR2 y otros medios más, por lo que no existe problema alguno en lograr la fidelidad exigida en el artículo 66, del código de notariado relativo a los testimonios. También, nos atrevemos a decir que ya muy pocas personas utilizan el papel carbón mencionado el artículo 69, si no es que ninguna, dejándolo en un completo desuso y obsolescencia.

Para que el instrumento público tenga existencia como tal, bastará la intervención de un notario, pero para obtener eficacia, deberá reunir determinados requisitos legales, conocidos en doctrina como requisitos de validez, ellos son: capacidad y competencia del Notario que autoriza el documento público y formalidades legales.

La teoría de la prueba preconstituida recogida por nuestra legislación de conformidad con el Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la Autenticidad de los documentos: “Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redargüirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario...” de aquí notamos la seguridad jurídica que ostentan los instrumentos públicos.

El instrumento público, como ya se indicó, es prueba preconstituida ya preparada con anterioridad al pleito futuro. Prueba escrita que está en ese instrumento y que, si alguna vez la necesitamos, la presentaremos de inmediato para hacer valer los derechos y exigir las obligaciones si fuera el caso.

Estamos en una era en que la tecnología, y principalmente la tecnología digital, está presente en todas partes, y no digamos en las oficinas profesionales de todas las ramas, por lo que, al pensar en las notarías, ya estamos pensando o utilizando las notarías digitales como es el caso de Brasil o España, entre otros países.

III. La Tecnología y el Derecho

Debido entre muchas otras cosas, a la pandemia del SARS-COV2 que produce la enfermedad del Covid-19, los países han apostado a la tecnología para facilitar a los ciudadanos y a los notarios el que puedan seguir creando contratos válidos y con la seguridad jurídica necesaria con el uso de la tecnología y esto no se detendrá.

Pero ¿cómo se relaciona la tecnología y el derecho notarial? En el caso de la tecnología y particularmente a la informática hay algunos conceptos que se deben tener claros, previo a cualquier discusión entre Tecnología y Derecho y son el hardware, el software, las redes y el internet.

Parafraseando lo que dice La Real Academia Española, el hardware es el conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una computadora. Sin embargo, el concepto suele ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología.

En el caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware permite definir no sólo a los componentes físicos internos (disco duro, placa madre o motherboard, microprocesador, circuitos, cables, etc.), sino también a los periféricos (escáneres, impresoras).

A diferencia del concepto anterior, el software se refiere a los componentes lógicos (intangibles) tales como el conjunto de programas, instrucciones, sistemas operativos, protocolos de comunicación y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora.

Veamos ahora una red informática, una red de comunicaciones de datos o una red de computadoras es la interconexión de distinto número de sistemas informáticos a través de una serie de dispositivos de telecomunicaciones y un medio físico (alámbrico o inalámbrico). Su función es compartir información en paquetes de datos. Los mismos se transmiten mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios, empleando una codificación especial. Para ello el sistema traduce a un mismo idioma los procesos de las distintas computadoras, a través de una serie de estándares de comunicación.

Al disponer de un número de computadoras en red, podemos crear una comunicación interna entre ellas, que sirve también para compartir puntos de acceso a Internet o la administración de periféricos (como una impresora). Además, permite el rápido envío de datos y archivos sin necesidad de emplear dispositivos de almacenamiento secundario como discos o memorias USB.

Internet, es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan una familia de protocolos llamada TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyan una red lógica única de alcance mundial. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Internet>, n.d.)

Las redes están presentes hoy en casi todos los ámbitos cotidianos, de hecho, la conexión a Internet a la que accedemos desde nuestra computadora, teléfono celular u otros dispositivos, no es otra cosa que una inmensa red de computadoras.

Ahora podemos abordar la pregunta que se dejó pendiente ¿cómo se relaciona el Derecho, particularmente el derecho notarial y el desarrollo de la tecnología y los demás conceptos discutidos arriba? Y aún más importante ¿Cómo se puede tomar ventaja de la implementación y uso de la tecnología en el derecho notarial y por lo tanto en la seguridad jurídica necesaria para ello?

IV. La Informática Jurídica y el Derecho Informático

Conforme el avance de la tecnología, el Derecho como muchas otras ciencias, se ha visto entre animado y obligado a adaptarse, por lo que los profesionales del derecho en general (Abogados, Notarios, Jueces, etc.) también han tenido que adecuarse a ella, pues al iniciarse el uso de la tecnología moderna en el diario vivir, el volumen de la información fue mayor a la capacidad humana y se hizo necesario buscar otros medios para poder almacenarla, procesarla y suministrarla, así como para brindar resultados.

Para realizar dicha tarea surge una disciplina denominada Informática, derivada del vocablo francés *informatique*, término que surgió en Francia en el año de 1962, inventado por el francés Philippe Dreyfus. (Viale Rohrmoser, 2003, p. 7 y 8). Conforme el avance de la tecnología los profesionales han debido adecuarse a ella, en especial el profesional del derecho debe aplicar la informática jurídica en el ejercicio de su profesión para ser más eficiente.

En la ciencia del derecho, la información juega un papel muy importante; este cuenta con dos áreas que implican un punto de encuentro entre el derecho y las nuevas tecnologías, estas son: La informática jurídica y el derecho informático.

Se puede definir la informática jurídica en sentido estricto, como una rama auxiliar del derecho que aparece debido al creciente avance de nuevas tecnologías y la necesidad de "automatizar" los procesos legales y sus actividades. De acuerdo con Jorge Páez Maña, es "el conjunto de técnicas instrumentales de almacenamiento y recuperación de datos, establecido con la finalidad de sustituir la actividad rutinaria del hombre en sus labores de localización y recuperación de información, mediante la utilización de computadoras" (Extraído de: Nougères Brian, Ana. "Introducción a la informática jurídica". (Wikipedia, n.d.).

El derecho informático o derecho de la informática, es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el derecho y la informática. Esta actividad involucra aquello referente a la contratación informática, delitos cometidos mediante su uso, relaciones laborales a que ella da lugar, litigios sobre la propiedad de programas o datos, etcétera.

V. La Tecnología en el Derecho Guatemalteco

Se ha hecho evidente, normal y cotidiano el uso que los Notarios hacen de la tecnología en su función notarial en beneficio de sí mismos y de sus clientes; una inmensa mayoría de estos profesionales, crean los instrumentos públicos usando computadoras para luego imprimirlos, en las hojas de papel sellado especial para protocolo, o en hojas de papel bond dependiendo si son instrumentos intra o extra protocolarios, pues nuestro ordenamiento jurídico lo establece así, y luego guardando o almacenando el archivo electrónico.

Ahora bien, la tecnología nos ayuda, pero también nos requiere la creación o adaptación de normas para que nuestra convivencia en sociedad sea armoniosa y en igualdad de condiciones, al menos, es lo que idealmente se persigue.

Nuestra Carta Magna en el Invocando el nombre de Dios establece: "Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho." (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985).

Como se cita en nuestra Carta Magna, *el Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz*, entre otras cosas es responsable de que nuestro régimen de legalidad promueva el bien común a través de normas jurídicas, esto definitivamente incluye la incorporación de la tecnología para conseguir ese objetivo.

Según el Artículo 2º.- Deberes del Estado.

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985).

La Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-09-86 "...al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales sino también sociales..."

Las condiciones del momento, este elemento es muy importante de resaltar, pues se refiere a que el Constituyente previó que las condiciones cambiantes del mundo requerirán leyes adaptables, modernas que busquen la eficiencia y eficacia en la aplicación de las normas en aras de la justicia.

Necesitamos introducir unos conceptos más para poder continuar nuestra discusión y que están contenidos en ya en nuestra legislación, en el artículo 2 del Decreto 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y firmas electrónicas y que solo se enumerarán a continuación, por lo que se pide al lector referirse a la citada norma para las definiciones: Certificado, comercio electrónico, comunicación, comunicación electrónica, estampado cronológico, firma electrónica, firma electrónica avanzada, firmante, iniciador,

intercambio electrónico de datos (IED), intermediario, mensaje de datos, parte que confía, prestador de servicios de certificación, sede o lugar del establecimiento comercial, sistema automatizado de mensajes, sistema de información.

Pero el tener incorporados los conceptos anteriormente mencionados en nuestra legislación no es suficiente, pues se crearon principalmente para el Derecho Mercantil y aunque esta rama del derecho y el Derecho Notarial son complementarios uno del otro, se puede incluir por analogía el contenido de una norma con la otra de conformidad con lo establecido por el Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, es necesario ampliar el marco jurídico para dotar a los instrumentos públicos digitales notariales con la seguridad jurídica adecuada.

En países como España o México, se han realizado reformas legislativas para poder incorporar y regular el uso de medios informáticos y tecnológicos a la actividad notarial, dentro lo que encontramos el protocolo electrónico, sin embargo, este es un tema de ámbito mucho mayor al objeto de la presente investigación por lo que se insta al lector a investigar al respecto, pues en esta investigación solamente se hace una referencia muy breve.

En el trabajo de investigación de (Trejo Jimmenez, 2015, p. 9 y 10) encontramos que el protocolo electrónico notarial al ser un documento electrónico se rige por los siguientes principios: **a)** fiabilidad, **b)** autenticidad, **c)** integridad, **d)** originalidad, **e)** no repudio y **f)** confidencialidad, de ellos se debe considerar lo siguiente:

Garantía de Autenticación. Consiste en la presunción de que el documento electrónico pertenece a la persona que lo firmó electrónicamente, mediante firma electrónica avanzada. Pretende garantizar que el firmante sea quién dice ser.

Garantía de Integridad. Presunción de que los datos no han sido alterados o manipulados desde el momento en que la firma electrónica avanzada fue añadida.

Garantía de Originalidad. Documento que ha recibido por primera vez su forma, texto o contenido, es un documento definitivo.

Garantía de No Repudio. Permite probar que una comunicación realmente ha existido y lo protege de su negativa.

Garantía de confidencialidad. Capacidad de mantener un documento electrónico inaccesible a todos, excepto a una lista determinada de personas.

Equivalencia Funcional. Implica que el documento electrónico surte los mismos efectos que un documento en papel y original, de esta manera la firma electrónica avanzada en un mensaje de datos satisface el requisito de la firma autógrafa en los documentos impresos.

Es importante resaltar que ya existen incorporaciones de la tecnología, relacionadas a documentos emitidos por Instituciones o Dependencias del Estado, certificaciones y otros similares, en nuestro país, entre los que podemos mencionar a los siguientes: El archivo general de protocolos ha implementado desde hace varios años un registro electrónico de los avisos especiales; pero la legislación no se ha actualizado para permitir a los notarios para que desde sus notarías puedan enviar los testimonios especiales e inclusive tener la posibilidad de una copia electrónica válida de los

instrumentos públicos y por ende, no se pueden usar copias de respaldo electrónicas con las características tecnológicas adecuadas para que se puedan compulsar testimonios o copias con validez legal de una forma más rápida, segura, económica y fácil de auditar por parte del: archivo general de protocolos, Órganos Jurisdiccionales y la Superintendencia de Administración Tributaria en los campos de acción respectivos. El Organismo Judicial actualmente permite obtener los Antecedentes Penales por medio electrónico³, dotando a esta diligencia de un trámite fácil y rápido para conseguir el importante documento y más importante aún que tiene validez.

Debido a que evidentemente la pandemia no detiene la vida diaria, los negocios, los estudios, etc.; es necesario seguir con la cotidianidad, pero con el reto de no tener contacto físico entre el notario y el interesado. Si en nuestro ordenamiento jurídico se contemplara el poder tener documentos digitales con valor y fuerza legal, es decir con seguridad jurídica, este caso no sería un problema tan grande como el que como sociedad estamos enfrentando, por lo menos desde el punto de vista de la relación notarial.

Conclusiones

Se cree firmemente que en Guatemala para dar validez y la fuerza legal a un instrumento público electrónico se deben incorporar al código de notariado, los elementos tecnológicos que fueron ya descritos, y que algunos ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, aunque no como parte del código de notariado propiamente.

La necesidad de implementar situaciones como el trabajo a distancia (tele trabajo), comunicaciones a distancia y virtuales, debido a que evidentemente la pandemia no detiene la vida diaria, los negocios o los estudios, y por lo tanto tampoco la necesidad de crear documentos públicos notariales, compulsar testimonios y copias de los mismos, con el reto de no tener contacto notario-interesado, hace particularmente valiosa la implementación, uso y aceptación de los documentos electrónicos con validez legal. Esto es extensible a cualquier otro tipo de desastre natural o caso de fuerza mayor.

1. Antes conocida como Unión Internacional del Notariado Latino, hasta que no hace mucho tiempo algunos países asiáticos ingresaron a la Unión y que no tienen un notariado basado en el notariado latino, se consideró que no era correcto seguir con el nombre original.

2. OCR es la sigla de Optical Character Recognition, una expresión en idioma inglés que puede traducirse como Reconocimiento Óptico de Caracteres. La noción se utiliza en la informática para nombrar a un procedimiento que permite digitalizar un texto a través de un escáner.

3. Los antecedentes se envían al correo electrónico del interesado.



Fotografía propiedad de Sora Shimazaki

Referencias Bibliográficas

- Altmark, D. R. (1987). Informática y Derecho, Volumen 1. Buenos Aires. Carrera armamentista. (s.f.). Recuperado el 5 de julio de 2021, de DW: <https://www.dw.com/es/carrera-armamentista/t-37948836>
- Constitución Política de la República de Guatemala. (1985). Guatemala.
- Decreto 24-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. (2008).
- Decreto 2-89 Ley del Organismo Judicial. (1989).
- Decreto 314 Código de Notariado. (1947). Guatemala.
- Gimenez Arnau, E. (1976). Derecho Notarial. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.
- Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. (s.f.). Recuperado el 18 de Abril de 2020, de <http://www.institutonotarial.org.gt/>
- Muñoz, N. R. (2004). Introducción al Derecho Notarial. Guatemala: Infoconsult editores.
- Real Academia Española. (s.f.). Obtenido de Diccionario de la lengua española: <https://dle.rae.es/>
- Suñé, E. (1986). Introducción a la informática jurídica y al derecho de la informática. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Informática y Derecho, Monográfico 12, 204.
- Téllez, J. (1996). Derecho Informático, 2da. Edición. México: McGraw-Hill.
- Unión Internacional del Notariado. (s.f.). Recuperado el 20 de Abril de 2020, de UINL: <https://www.uinl.org/>



COMISIÓN PRESIDENCIAL
DE GOBIERNO ABIERTO
Y ELECTRÓNICO

Hiram Sean Urrutia Gramajo es Ingeniero en Ciencias y Sistemas graduado en la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en Administración Financiera en la Escuela de Estudios de Posgrado, de la Universidad de San Carlos. Además cuenta con Pensum Cerrado de la Maestría en Derecho Notarial, de la universidad Mariano Gálvez.



Copyright (c) Hiram Sean Urrutia Gramajo



The background image is a blue-tinted photograph showing several police officers in tactical gear, including helmets and vests, holding rifles. One officer in the foreground is aiming a rifle. A man in a light-colored shirt and trousers is kneeling on the ground in front of them. The scene appears to be an urban street.

Inteligencia Criminal en Guatemala un Desafío Emergente

*Criminal Intelligence in Guatemala
an Emerging Challenge*





Fotografía propiedad de Diario de Centroamérica



Inteligencia Criminal en Guatemala un Desafío Emergente



Julissa Virginia de Paz Morales
Dirección General de Inteligencia Civil
DIGICI
enlace2@digici.gob.gt

Recibido: 21-07-2021
Publicado: 14-12-2021

Resumen

El presente artículo describe los retos de la inteligencia criminal en Guatemala desde su creación, evolución y proyección a futuro. Los resultados obtenidos del análisis, se centran en conocer el marco legal, avances y aportes para la toma de decisiones de alto nivel para enfrentar de forma efectiva los riesgos y amenazas que son provocados por el crimen organizado y delincuencia común y que afectan a la Seguridad de la Nación.

Lo anterior se logró a partir del análisis de resultados de la Dirección General de Inteligencia Civil y la representación fáctica de la información obtenida; consulta bibliográfica, trabajo de campo, en el que se aplicaron diferentes técnicas de recolección como la entrevista semiestructurada y la observación no participante.

Abstract

This article describes the challenges of criminal intelligence in Guatemala since its creation, evolution and future projection. The results obtained from the analysis are focused on knowing the legal regulations, advances and contributions for making high level decisions to effectively face the risks and threats caused by organized crime and common crime affecting Security of the Nation.

This was achieved from the analysis of the results of the Dirección General de Inteligencia Civil and the factual representation of the information obtained; bibliographic consultation, field work, in which different collection techniques were applied, such as the semi structured interview and non participant observation.

Palabras Clave

- Riesgos
- Amenazas
- Inteligencia Civil
- Crimen Organizado
- Seguridad de la Nación

Key Words

- Risk
- Threats
- Civil Intelligence
- Organized Crime
- National Security

En la actualidad, las capacidades institucionales de la Dirección General de Inteligencia Civil, están soportadas en el cúmulo de conocimiento colectivo e individual de los agentes de inteligencia, capacidades tecnológicas, marco doctrinal, las alianzas estratégicas y la articulación de política sectorial, las cuales enmarcan nuevos modelos para atender la Seguridad de la Nación.

El artículo de reflexión utiliza un enfoque analítico; privilegia la investigación descriptiva como la metodología más pertinente para lograr un abordaje interdisciplinar para entender el fenómeno de aplicación de la inteligencia criminal en Guatemala.

Pretende generar la reflexión sobre el papel de la inteligencia criminal y el impacto de la misma en la Seguridad de la Nación; los desafíos internos y externos que atraviesa en este mundo moderno “La emergencia de nuevas realidades conlleva la necesidad de construir nuevas categorías a partir de las cuales se pueda explicar la complejidad” (M. Calvillo y A. Favela, 1996).

Método

El presente trabajo privilegia el tipo de investigación descriptiva; ya que al establecer parámetros de medición de la inteligencia criminal y el impacto que provoca en la percepción de la ciudadanía es casi imperceptible, lo que la hace efectiva; sin embargo, las acciones de la inteligencia criminal no se pueden medir de una manera cuantitativa y exacta. Por lo que la investigación se basa en muestreos, observaciones y la triangulación de información estadística que refleja la criminalidad y la relación de los hechos con el crimen organizado y delincuencia común basados en información oficial proporcionada por Policía Nacional Civil para su estudio;

así como, se sitúa el avance de la inteligencia criminal en tres momentos: **a)** el momento de su creación; **b)** situación actual; **c)** proyección en los próximos diez años (R. Hernández Sanpieri; C. Fernández Collado & M. de Baptista Lucio., 2014); lo anterior se realizó tras el análisis de entrevistas presenciales y de cuestionarios a expertos en temas de seguridad e inteligencia criminal.

Se utilizó el diseño transversal o transeccional ya que, no se ve afectado por ningún tipo de proceso, por lo que solamente se dedicó a observar al evento tal cual sucede, limitándose únicamente a analizarlo.

Mientras que el tipo de técnica como ya mencionamos anteriormente fue la observación y la información utilizada fue la cuantitativa, utilizando metodologías de estudio estadísticas y numéricas. Y en el caso de los datos cualitativos, se obtuvo la opinión de expertos que se encuentran inmersos en el trabajo de la seguridad y la inteligencia criminal, dinámicas que se suceden en el grupo sobre el cual se está desarrollando la investigación.

Desarrollo de la Inteligencia Criminal en Guatemala

Referencia histórica

Tras treinta y seis años que enfrentó Guatemala un Conflicto Armado Interno, el cual inició en 1960 y culminó con la suscripción de los acuerdos de Paz, Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996. Da inicio el período de la transición a la democracia en los países centroamericanos, ésta se inicia con la realización de diversas cumbres realizadas por el -Grupo Contadora- “El Grupo Contadora fue una instancia multilateral establecida por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, en 1983, para promover conjuntamente la paz en Centroamérica” (Gómez, 2007).

Con ello se propicia una nueva etapa para la democratización y afianzamiento de la democracia. A partir de 1991, Centroamérica impulsa una visión integral de la seguridad regional; y en 1995 se suscribe el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, con el cual se abre la brecha hacia un nuevo modelo de Seguridad Regional, con este Tratado los países centroamericanos avanzan contra las nuevas amenazas, y enfrentan nuevos retos y desafíos que ponen en riesgo la seguridad.

Al suscribir Guatemala doce Acuerdos de Paz; se suscribe el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del Ejército en una sociedad democrática, su razón de ser es la construcción del poder y participación de la sociedad guatemalteca y construir un sistema nuevo de organización social, basado en una democracia real, representativa y participativa; cimentada en la diversidad multiétnica de la nación y en descentralizar el poder público para la toma de decisiones.

Estas relaciones no deben estar determinadas por diferencias ideológicas o de otro tipo. Debe superarse al antagonismo Estado-sociedad civil con una oportuna interacción y complementación en la construcción del desarrollo.

Este aspecto es de vital importancia en este nuevo modelo de construcción democrática, y es allí donde nace el nombre de la Inteligencia Civil en Guatemala y no criminal como se utiliza en otros países.

Esto tiene su fundamento en el respeto de los Derechos Humanos el cual es el eje transversal inmerso en el proceso de transición a un nuevo modelo de seguridad.

Con la creación de este acuerdo, nacen y se fortalecen instituciones que velarán por los derechos humanos; la democracia; la seguridad ciudadana; la seguridad de la nación; se reestructura la función del Ejército de ese momento a un Ejército en una sociedad democrática; se crea una nueva escuela policial con una nueva mística y cultura de trabajo; y establece una nueva era de la inteligencia criminal en Guatemala.

El acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y la función del Ejército en una sociedad democrática, establece que: *"se creará un departamento de inteligencia civil y análisis de la información que dependerá del Ministerio de Gobernación y será responsable de recabar información para combatir el crimen organizado y la delincuencia común por los medios dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y en estricto respeto a los derechos humanos. El departamento de inteligencia civil y análisis de información no podrá estar integrado por ciudadanos que tengan limitaciones en sus derechos civiles y políticos"*.

Derivado de lo anterior, cuatro años más tarde se crea en septiembre del año 2000, el Acuerdo Gubernativo 462- 2000 con el fin de crear al Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información denominado DICAÍ que dependía del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, un grupo de organizaciones representantes de la sociedad civil, deciden derogar este acuerdo a un mes de su creación y presentan una nueva propuesta.

Esta comisión se integró por profesionales del Ministerio de Gobernación; Ministerio de la Defensa Nacional; Ministerio de Finanzas Públicas; Secretaría de Análisis Estratégico; Secretaría de la Paz y Organismo Judicial: Representantes de la Sociedad Civil: Fundación Myrna Mack; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales; Institución de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible; Asociación Seguridad en Democracia e incidencia Democrática y el Proyecto hacia una Política de Seguridad Ciudadana.

En mayo de 2003, cuando el presidente de la República de Guatemala, remite al Organismo Legislativo la iniciativa de Ley de creación de la Dirección General de Inteligencia Civil denominada DIGICI. Dos años más tarde en octubre de 2005, mediante el Decreto Número 71-2005 del Congreso de la República de Guatemala, nace a la vida jurídica la Dirección General de Inteligencia Civil.

Mientras, su proceso de implementación, se realiza en abril del año 2007; en el 2008, mediante Acuerdo Gubernativo Número 2003-2008, se aprueba el Reglamento de la Ley que establece su estructura orgánica, funciones y mecanismos de coordinación.

Actualidad de la inteligencia criminal en Guatemala

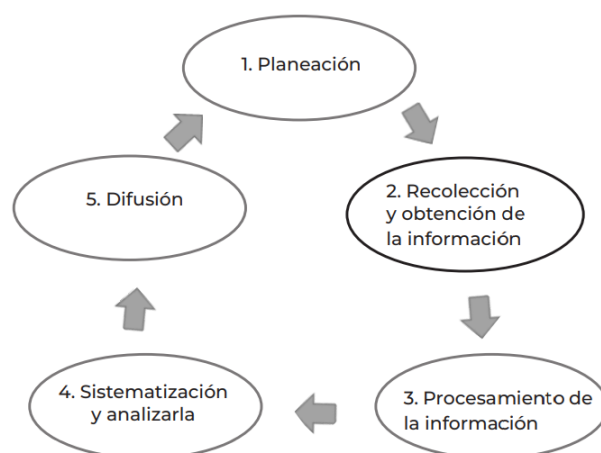
En octubre del 2021, la Dirección General de Inteligencia Civil DIGICI, cumple 14 años de arduo trabajo en el país; sin embargo, muchos ciudadanos desconocen su función, el ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué? y, ¿a quiénes persigue la inteligencia civil? Para dar respuesta a lo anterior definiremos que es inteligencia criminal.

De acuerdo al Plan Institucional 2021-2028 del Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala, la inteligencia *"es la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización, procesamiento y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la nación para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones"*.

De acuerdo a la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil, Decreto Número 2007- 2005 del Congreso de la República, la Dirección General de Inteligencia Civil tiene como principales funciones dar cumplimiento al ciclo de inteligencia.



Diagrama 1 Ciclo de Inteligencia



Fuente: elaboración propia con información Decreto Número 71-2005 Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil.

El ciclo anterior, resume cada una de las acciones que realiza la Dirección General de Inteligencia Civil; dentro de éstas, también le corresponde, integrar el Sistema Nacional de Inteligencia en coordinación con la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado -SIEE-, y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; así como, realizar trabajo coordinado con otras instituciones.

Tanto el Sistema Nacional de Seguridad como el Sistema Nacional de Inteligencia durante los últimos años, han pasado del nivel político al operativo.

El Decreto número 17-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su reglamento, establecen que el Sistema Nacional de Inteligencia, es el encargado de la preparación y formulación de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas -ANRA-, la cual enlista las amenazas, vulnerabilidad y riesgos a la Seguridad de la Nación, al bienestar de las personas, al desarrollo de la sociedad y a la estabilidad de sus instituciones. Ésta a su vez, desarrolla el conjunto de lineamientos y cursos de acción necesarios para reducir los riesgos y mitigar las amenazas a la Seguridad de la Nación.

La Dirección General de Inteligencia Civil, es la encargada de la identificación y análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades generadas por grupos del crimen organizado y delincuencia común que están priorizadas en la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas.

La Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional: define al crimen organizado, como: "un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria; que ha existido por un periodo de tiempo; actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento; con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material".

Mientras que la delincuencia menor o delincuencia común, es la más palpable, es cometida por un individuo o cuando mucho por dos, de una forma improvisada y que tiene por objeto la comisión de un delito que podría ser desde una falta menor hasta una grave y calificada (García Maynez, 2006).

De acuerdo a la priorización de las amenazas y riesgos contemplados en la ANRA 2021, la Dirección General de Inteligencia Civil le corresponde dar seguimiento a:

I) Amenazas criminales (narcoactividad; extorsión; defraudación y contrabando aduaneros; hechos ilícitos cometidos por miembros de maras y pandillas). **II)** Riesgos (Lavado de dinero u otros activos; robo y hurto; trata de personas; tráfico ilícito de personas; tráfico y tránsito ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos; cibercrimen y grupos armados ilegales).

La inteligencia criminal, constituye el valor adicional que puede reconocerse o asignársele a la realidad cualitativa y cuantitativa de un hecho, mediante el proceso analítico. Por lo tanto, no es fácil de medir, ya que no se mide por cantidad de hechos o por personas aprehendidas.

La inteligencia civil tiene tradicionalmente, tres tipos de funciones: producción de inteligencia sobre el entorno de seguridad, planificación y ejecución de operaciones para la obtención de información; influencia direccionada sobre los acontecimientos para lograr prevenir un hecho; y también, desarrollar medidas de contrainteligencia para la protección de los agentes de Inteligencia, las actividades y los resultados sus instalaciones y, en sentido amplio, de los intereses y la información que coadyuvan a contrarrestar las acciones del crimen organizado.

El trabajo realizado por la Dirección General de Inteligencia Civil, no es reconocido públicamente por la sociedad; pero sí está presente en la prevención y por ende en el control de las amenazas y mitigación de los riesgos que atentan contra la vida, bienes y seguridad de los ciudadanos.

En los últimos diez años, la incidencia criminal registra una disminución importante; y esto se debe a la coordinación y trabajo interinstitucional que se ha llevado a cabo con el apoyo del trabajo de inteligencia. Sin embargo, es importante fortalecer los sistemas de recolección de información oficial y homogenizar los datos de las diferentes instituciones a nivel nacional para tener mejores resultados.

Cuadro 1

Comparativo de incidencia delictiva a nivel República. Años 2015 al 2020. Y del 1 de enero al 31 de octubre de 2021.

No.	Incidencia delictiva	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
1	Homicidio	4,778	4,520	4,428	3,887	3,578	2,577	2,351
2	Lesionados	5,888	5,868	5,228	4,245	3,360	2,596	2,098
	Total de hechos que atentan contra la vida	10,666	10,388	9,656	8,132	6,938	5,173	4,449
3	Robo y hurto en residencias	932	969	628	511	422	517	478
4	Robo y hurto en comercios	594	498	505	452	338	670	619
5	Robo y hurto de vehículos	4,572	3,888	3,261	2,836	2,030	1,589	1,597
6	Robo y hurto de motocicletas	6,436	5,975	5,349	5,050	3,623	3,138	3,061
7	Robo y hurto de armas de fuego	1,390	1,378	1,003	858	959	612	566
8	Robo a bancos	8	3	6	6	3	3	2
9	Robo a turistas	48	45	32	7	11	1	3
10	Asalto y robo a peatones	1,554	1,466	1,253	1,215	1,000	724	607
11	Robo a unidades blindadas	0	0	0	0	0	0	0
12	Robo a buses del transporte público	75	45	26	17	50	12	34
13	Robo a iglesias	79	57	44	49	42	18	11
	Total delitos contra el patrimonio	15,688	14,324	12,107	11,001	8,478	7,284	6,978
14	Secuestros	34	28	24	26	17	15	7
15	Desaparecidos	3,667	3,526	2,992	2,514	2,351	1,825	2,140
	Total de delitos contra la libertad	19,389	17,878	15,123	13,541	10,846	9,124	2,147
16	Violaciones	613	571	551	408	353	275	252
17	Violencia Intrafamiliar	1,861	1,842	1,355	1,132	933	1,204	905
	Total incidencia criminal	48,217	44,949	38,792	34,224	27,548	23,060	14,731

Fuente: elaboración propia con datos proporcionadas por la Policía Nacional Civil. Años 2015-2020. *del 1 de enero al 31 de octubre de 2021

En otras palabras, la inteligencia criminal es sinónimo de prevención; actúa antes que la investigación policial y la investigación criminal.

La inteligencia se logra, con el tratamiento de información que mediante el ciclo de inteligencia se transforma en inteligencia oportuna y veraz para la toma de decisiones a alto nivel. Su fin es identificar y comprender los elementos, la estructura, los acontecimientos y las claves de funcionamiento de la realidad estudiada, adaptándose a las demandas específicas de las amenazas y riesgos que enfrenta la Seguridad de la Nación.

Algunas instituciones tienen una percepción equivocada de la inteligencia criminal; considerando que, la inteligencia civil que es el caso de Guatemala, debe participar en el esclarecimiento de casos de impacto o bien prevenir hechos específicos que vulneran a un sector particular. Sin embargo, como referimos anteriormente, la inteligencia previene las amenazas generadas por el crimen organizado y delincuencia común. Y que en coordinación con la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y otras dependencias puede apoyar y asesorar en casos específicos.

Las amenazas transnacionales como la narcoactividad; lavado de dinero; extorsiones; trata y tráfico ilegal de personas, entre otras. Son temas, que son abordados por la Dirección General de Inteligencia Civil con el objetivo último de prevenir y resguardar la vida y los bienes de los guatemaltecos; sin embargo, también, aportan información valiosa para la judicialización de casos, la coordinación de la labor policial y la investigación criminal establecida en Guatemala.

Los reconocimientos nacionales e internacionales de la aprehensión, extradición o sentencia de personas involucradas en el crimen organizado y delincuencia común, lo reciben otras instituciones. Sin embargo, la Dirección General de Inteligencia Civil y sus agentes de inteligencia saben que la huella de calidad y excelencia de su trabajo están inmersas en esos resultados.

Resultados de la Inteligencia Criminal

Inteligencia en Tiempo Real

Desde el año 2014, la Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI-, tiene cobertura a nivel nacional; ha sido galardonada por Agencias de Inteligencia de Latinoamérica y Estados Unidos por fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala y por ser parte fundamental en el combate del crimen organizado y delincuencia común. Cuenta con agentes de inteligencia comprometidos con su país; con su institución y con la ciudadanía.

El proceso de reclutamiento y selección de su personal es sumamente cuidadoso, ya que se requiere de personas con un alto sentido de compromiso; ética y valores humanos.

Actualmente, no existe una carrera de inteligencia criminal en Guatemala; sin embargo, se realizan esfuerzos para mantener al personal que labora en la Dirección General de Inteligencia Civil, a la vanguardia de los fenómenos criminales, tecnología y conocimiento en temas relacionados con temas de seguridad, estrategia y geopolítica.

Desde el 2012, la Dirección General de Inteligencia Civil ha rendido informes a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Ministerio de Finanzas Públicas y Ministerio de Gobernación, con el enfoque de la Gestión por Resultados en la Administración Pública. Presentando estrategias que garantizan la ejecución eficiente de la inversión pública, con el fin de optimizar el presupuesto y reorientar los recursos para el alcance de los resultados.

También, utiliza el sistema único de evaluación del desempeño como elemento imprescindible en la planeación y programación institucional, lo que ha motivado al personal a dar excelencia y calidad en todo el quehacer institucional.

Los informes contienen: informes de inteligencia; alertas; geolocalización y georreferenciación; cantidad de allanamientos realizados derivados del trabajo de inteligencia generada; cantidad de personal capacitado a nivel nacional e internacional; así como, los elementos correspondientes al tema administrativo.

Actualmente la Dirección General de Inteligencia Civil, cuenta con agentes de inteligencia a nivel nacional (entre agentes de obtención, analistas y personal técnico del área sustantiva y personal administrativo); el 75% del trabajo de inteligencia se realiza a través de fuentes humanas; mientras que solo el 25% con apoyo tecnológico.

De acuerdo a la cantidad de población proyectada a nivel República, se cuenta con 2.96 Agentes de Inteligencia por cada 100,000 habitantes.

El fortalecimiento institucional se logrará a través de la creación de estrategias de desarrollo y consolidación institucional que fortalezca el quehacer de la Dirección General de Inteligencia Civil, promoviendo así mejores resultados que incidan en la Seguridad de la Nación.

Fortalecer el trabajo de la inteligencia criminal es un esfuerzo que implica identificar las necesidades que la institución posee frente a las nuevas amenazas que existen, con el fin de prevenirlas.

En este sentido, se puede reforzar con una mayor asignación presupuestaria, incremento de personal para conseguir un mínimo de 1500 agentes de inteligencia que correspondería a 8.83 por cada 100,000 habitantes; nuevas instalaciones y equipo tecnológico que promueva el funcionamiento y soporte logístico para realizar con eficiencia y eficacia la labor de inteligencia a nivel República.

Este fortalecimiento de las capacidades institucionales conllevará a brindar productos de inteligencia que permitan controlar las amenazas y prevenir los riesgos identificados, así como satisfacer las demandas de la población, en materia de seguridad.

Gradualmente, el presupuesto asignado a la DIGICI se ha incrementado, lo que ha permitido el recurso humano y logístico; sin embargo, tal como se evidencia en la siguiente tabla, la asignación financiera se ha mantenido, aunque con algunas pequeñas fluctuaciones, en los últimos doce años; con lo cual se limita el crecimiento y fortalecimiento institucional.

Cuadro 2

Asignación presupuestaria anual de la Dirección General de Inteligencia Civil

Año	Presupuesto asignado	vigente
2009	84 millones	84 millones
2010	84 millones	84 millones
2011	64 millones	55 millones
2012	68 millones	61 millones
2015	98 millones	110 millones
2020	87 millones	77 millones
2021	87 millones	77 millones

Fuente: elaboración propia con datos proporcionadas por la División Financiera de la Dirección General de Inteligencia Civil-DIGICI-. Año 2021.

Con un presupuesto vigente para 2021 de Q77 millones; el 43% se utiliza para pago de salarios (33.11 millones); el 54% es para funcionamiento (41.58 millones) y únicamente un 3% (2.31 millones) se utiliza en inversión.

Los 2.3 millones utilizados para inversión; no son suficientes para adquirir el equipo necesario para realizar un trabajo tan especializado. En inteligencia, el equipo tecnológico, equipo audiovisual, softwares recientes y sus actualizaciones, vehículos para la labor y son indispensable para el buen desempeño de las funciones de inteligencia.

Sin embargo, esta limitación presupuestaria vulnera la seguridad de las operaciones y de los agentes dedicados al trabajo de inteligencia.

Lo anterior, hace referencia a la optimización de los recursos y del trabajo operativo bien realizado; contar con tecnología de vanguardia y el equipamiento permitirá ser más eficientes en la labor de inteligencia para prevenir, controlar y combatir el crimen organizado y la delincuencia común.

La importancia de contar con una carrera en el servicio de inteligencia criminal, es otro punto a considerar, ya que radica en lograr la permanencia del personal administrativo y sustantivo, lograr su profesionalización para garantizar su especialidad; el aprendizaje de nuevas tecnologías; con el fin de que el funcionamiento de la Dirección General de Inteligencia Civil sea más eficaz y eficiente. Una alta rotación de personal puede significar un proceso constante de largas curvas de aprendizaje que hacen ineficiente la prestación de los servicios públicos.

Actualmente los salarios asignados por la Dirección General de Inteligencia Civil son regulados de acuerdo a la Ley de Servicio Civil que está a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil; lo cual hace que los salarios de los agentes de inteligencia sean igual que los salarios de los profesionales de otras dependencias e instituciones.

Lo anterior, vulnera su permanencia, ya que al adquirir conocimientos y experiencia en esta rama de la seguridad y no tener la oportunidad de un mejor salario dentro de la institución. Por lo que optan, por aplicar a convocatorias de la iniciativa privada donde son remunerados hasta en el doble del salario proporcionado por el Estado.

Discusión y Perspectivas de Futuro

El mundo está cambiando radicalmente, prueba de ello es el momento histórico que el mundo atraviesa provocado por la pandemia del Covid-19, que ha generado la adaptación de nuevas prácticas individuales que aportan al beneficio colectivo. De esta cuenta, así como el ser humano aprende a adaptarse a estas nuevas realidades; el ámbito de la seguridad, también debe cambiar constantemente y transformar el modo de actuación de sus institucionales para enfrentar las nuevas amenazas de las organizaciones dedicadas al crimen organizado.

En este contexto, la inteligencia criminal aporta significativamente, al reunir distintas disciplinas sociales y exactas, como la criminología, la estadística, el cálculo matemático, la sociología, la psicología, la geografía y geopolítica y otros ámbitos del saber, tendientes a conocer la criminalidad y prevenirla mediante estrategias para la toma de decisiones.

Lograr el reconocimiento ciudadano de la labor de inteligencia en Guatemala, es uno de los retos a corto, mediano y largo plazo que posee el Estado. ya que implica un cambio mental y cultural en los gobernantes y gobernados, instituciones públicas y privadas, como en los mismos agentes de inteligencia; así como en la restructuración de los sistemas de información delincencial y análisis criminológico: en especial, lo relacionado con sus procesos, los cuales se establecen en función de la política y estrategia criminal.

Si se hacen estos esfuerzos, se tendrán mayores resultados en el tema de la judicialización y apostar en la inversión de programas educativos para la prevención del delito. Como parte del aporte de este artículo a la reflexión sobre el tema de la inteligencia criminal en Guatemala; se obtuvo una muestra, que consistió en la opinión de profesionales dedicados al trabajo del ámbito de la seguridad ciudadana; inteligencia y la Seguridad de la Nación.

Y los aportes coinciden, que la labor de inteligencia criminal, constituye un eslabón con impacto significativo para la toma de decisiones de las autoridades, quienes integran el Sistema Nacional de Seguridad.

Sin embargo, están convencidos, que aún hay una brecha que debe fortalecer y regular su accionar. De esta cuenta, se describen los desafíos que la Dirección General de Inteligencia Civil enfrenta, los cuales se precisan en orden de prioridad:

a) Fortalecer la confianza y la credibilidad en la población y la opinión pública, de la labor de inteligencia criminal a través de los resultados que hablen por sí solos y que sean inequívocos de una gestión eficaz y eficiente.

c) La identificación del rol de la inteligencia criminal; para no realizar investigación policial y criminal. Duplicando esfuerzos que, a largo plazo, se traducen en inversión del recurso humano y técnico de la institución.

d) El reto del avance científico y tecnológico que presenta el crimen organizado y la ausencia de tecnología y profesionalización de la inteligencia criminal.

e) El fortalecimiento integral de la Dirección General de Inteligencia Civil; que deben figurar, desde reformas a la ley; autonomía e independencia de su labor; presupuesto; carrera de inteligencia y las que sean necesarias para su desarrollo y efectividad.

f) Fortalecer la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional de la inteligencia guatemalteca.

b) Evitar que se politice la inteligencia en Guatemala, que repercutiría en la pérdida de credibilidad y el debilitamiento de la misma institución, al contravenir la naturaleza para lo cual fue creada.



Fotografía propiedad de Diario de Centroamérica

Conclusiones

Son muchos los elementos que se deben tomar en cuenta para el reconocimiento, valoración y confianza del trabajo de inteligencia en Guatemala. Y para empezar debemos de entender ¿Cuál es el fundamento legal y la razón de ser del trabajo de la inteligencia criminal? y considerar a los agentes de inteligencia como aliados para la prevención de las amenazas y los riesgos que enfrenta la seguridad pública y la Seguridad de la Nación.

También, el Estado debe de crear estrategias para que la inteligencia criminal no duplique acciones de la investigación policial y la investigación criminal; ya que son funciones distintas que se deben a herramientas y estrategias diferentes para el logro de resultados.

El Sistema Nacional de Seguridad en coordinación con instituciones administrativas dedicadas a velar por la Seguridad de la Nación; deben implementar un sistema estadístico nacional que contenga los datos oficiales que recolecten todas las instituciones y poder tener acceso a éstos, con el objetivo de no duplicar información y tener la certeza de la veracidad de los mismos.

Es necesario también, revisar la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil y su dependencia jerárquica; ya que, al ser dependencia del Ministerio de Gobernación, y éste a su vez pertenece al Organismo Ejecutivo, podría limitar la objetividad de las acciones de inteligencia.

No debe olvidarse, dentro del fortalecimiento institucional de la Dirección General de Inteligencia Civil, el resguardo de sus estrategias, sus bases de datos; información; y el amparo que el Estado brinde a los agentes de inteligencia tanto para la realización de su trabajo como en el caso de que el crimen organizado violente su derecho a la libertad y a la vida.

Recomendaciones

Como en los inicios de la creación del Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información denominado DICAL y su transición de lo que se conoce actualmente como Dirección General de Inteligencia Civil DIGICI, la participación de la sociedad civil fue fundamental; es importante también, que tanto el Estado, la academia, iniciativa privada y la sociedad civil en general puedan reflexionar sobre la importancia del fortalecimiento de la inteligencia criminal en Guatemala.

Creando caminos de oportunidad y de confianza para el oportuno y eficaz combate de las amenazas y riesgos provocados por el crimen organizado transnacional y la delincuencia común.



Fotografía propiedad de Forbes Centroamérica

Referencias Bibliográficas

- Arias Valencia, M. M. (2000). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones. Universidad de Antioquia, Facultad de Enfermería. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. Recuperado el 9 de julio de 2021.
- Dialnet-LaTriangulacion Metodologica-5331864. pdf:Dialnet-LaTriangulacionMetodologica-5331864. pdf.
- García Maynez, E. (2006). Introducción al Estudio del Derecho. México: Ed Porrúa 59 Edición.
- Gómez, M. O. (2007). Retrospección de Contadora: los esfuerzos de México para la paz en Centroamérica (1983 1985). México: El Colegio de México.
- M. Calvillo y A. Favela. (2 de abril de 1996). Hacia la categoría de sujeto social en la teoría sociológica. (U. A. Metropolitana, Ed.) Recuperado el 2021 de julio de 2021, de Polis México: <https://polismexico.izt.uam.mx/index.php/rp/article/view/198/198>.
- R. Hernández Sanpieri; C. Fernández Collado & M. de Baptista Lucio. (2014). Metodología de la Investigación. Costa Rica: McGRAW-HILL /INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Santiago Hernández, A. R. (2012). Sociología: Para comprender la sociedad. En A. R. Hernández, Sociología: Para comprender la sociedad (págs. 74-75). Esfinge.



Julissa Virginia de Paz Morales es Comunicadora Social, especializada en investigación aplicada. Cuenta con quince años de experiencia en planificación estratégica, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Además cuenta con diez años de experiencia en análisis estratégico, seguridad y Geopolítica.



Copyright (c) Julissa Virginia de Paz Morales





Diagnóstico Municipal en Gestión Integral para la Reducción del Riesgo de Desastres

Municipal Diagnosis Management for the Disaster Risk Reduction





Fotografía propiedad de CONRED Guatemala



Diagnóstico Municipal en Gestión Integral para la Reducción del Riesgo de Desastres



Gerardo Emanuel Narciso Pineda

Encargado del Departamento de Fortalecimiento al Sistema **CONRED**

Juan José Cifuentes López

Asesor del Departamento de Fortalecimiento al Sistema **CONRED**
voluntariosistemaconred@gmail.com

Recibido: 26-07-2021

Publicado: 14-12-2021

Resumen

De acuerdo con el contexto territorial, político, económico y social de Guatemala, es de vital importancia generar mecanismos que permitan coadyuvar a crear las condiciones esenciales para garantizar el Desarrollo Sostenible. La herramienta "Diagnóstico municipal en Gestión Integral para la Reducción de Riesgo de Desastres" se implementó con el objetivo de comprender la forma en que se realizan las acciones en el área de Preparación ante emergencias desde la óptica de la Gestión del Desempeño Municipal.

Como resultado del estudio cualitativo se obtuvo un aproximado de 1400 unidades de análisis, que posteriormente se categorizaron para su interpretación, logrando identificar las principales necesidades en la materia para la posterior implementación de acciones de fortalecimiento al Sistema CONRED en el nivel municipal.

Abstract

According to the territorial, political, economic and social context of Guatemala, it is of vital importance to generate mechanisms that help create the essential conditions to guarantee Sustainable Development. The survey "Municipal Diagnosis in Management for Disaster Risk Reduction" was implemented with the aim of understanding how actions are carried out in the Emergency Preparedness area from the perspective of Municipal Performance Management.

As a result of the qualitative study, an approximate of 1400 units of analysis were obtained, which were later categorized for their interpretation, managing to identify the main needs in the matter for the subsequent implementation of actions to strengthen the CONRED System at the municipal level.

Palabras Clave

- Riesgos
- Reducción
- Gestión
- Municipal
- CONRED

Key Words

- Risk
- Reduction
- Management
- Municipal
- CONRED

El presente estudio surgió del mandato legal establecido en el artículo 41, numeral cuarto del Reglamento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED1- y de las funciones del Departamento de Fortalecimiento al Sistema CONRED definidas en el Manual de procedimientos de la Dirección de Preparación2 como parte del proceso de fortalecimiento institucional del Sistema CONRED planificado para el año 2021.

Con un enfoque centrado en los procesos de la Gestión Integral para la Reducción del Riesgo, la herramienta “Diagnóstico municipal en gestión integral para la reducción del riesgo de desastres” buscó recopilar información actualizada que sirviera para la identificación de necesidades en la materia para la implementación de acciones de fortalecimiento en el nivel municipal.

Desarrollo del Estudio

La población para el ejercicio fueron los 340 municipios del país con una muestra estimada de 41 municipios en las cinco regiones de CONRED a nivel nacional, estableciendo un margen de error del 15% y una confianza del 90%.

En los territorios donde se tenían acreditadas y/o en proceso de conformación y acreditación las Coordinadoras para la Reducción de Riesgo de Desastre3, se entrevistó al coordinador o presidente de la Coordinadora.

En los territorios donde no se contaba con Coordinadoras acreditadas se determinó que para la implementación de la herramienta se debían seleccionar los siguientes actores territoriales: Enlaces y Alcaldes Municipales. Sin embargo, por su quehacer institucional debieron delegar a un responsable para participar en el diagnóstico.

Asimismo, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la herramienta y generar información que respalde el accionar de la SE-CONRED en el territorio nacional, se delegó para su implementación, acompañamiento, asesoría y coordinación del proceso a los Delegados departamentales y Delegados regionales, quienes a su vez debían contar con un “Mapeo de Actores” (Gellert, Gisela y Gamarra, 2003) preliminar para el desarrollo del diagnóstico5.

El diagnóstico partió metodológicamente como un estudio cualitativo, guiado por el enfoque etnográfico de investigación (Aguilar y Ander-egg, 1999), mediante un proceso exploratorio y articulado de recolección de información a través de la técnica de grupo focal basado en los elementos descritos en la siguiente tabla1.

A partir de la revisión del cuestionario de medición del nivel del funcionamiento Municipal en materia de Preparación ante emergencias o desastres, se determinó la necesidad de generar una herramienta actualizada la cual buscó una “caracterización holística” (De Robertis, 2006) de la situación del municipio en materia de Gestión Integral para la Reducción del Riesgo de Desastres, para coadyuvar a la implementación de procesos formativos formales y no formales con actores sectoriales y territoriales a nivel municipal. Se definió un total de 34 ítems.



En ese sentido la herramienta en mención se construyó a partir de la revisión de los siguientes documentos: Marco de SENDAI6, Política Nacional para la reducción de Riesgo a los Desastres en Guatemala7, Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Guatemala 2018-2022, Manual de referencia para la intervención territorial en gestión integral del Riesgo de desastres, Ley de CONRED (Decreto Legislativo 109-96) y su reglamento (Acuerdo Gubernativo 49-2012).

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la viabilidad y alcanzar los objetivos propuestos, para el desarrollo e implementación de la herramienta de diagnóstico se determinó como población objeto del diagnóstico a diferentes actores sectoriales y territoriales, de acuerdo al contexto o estado del desarrollo organizacional del municipio o territorio. Para la implementación de la herramienta se identificaron dos momentos, esto con el objetivo de garantizar tanto la eficacia de la herramienta como garantizar que el proceso fuera sustentable y viable.

Tabla 1

Componentes y categorías para el diagnóstico

Componentes	Categorías
Conocimiento del riesgo	-Fuentes de información reconocidas, actualizadas y de acceso público - Análisis del riesgo - Capacidad técnica-científica
Preparación y mitigación del riesgo	-Planes, proyectos y/o campañas -Recursos municipales disponibles
Preparación ante la respuesta	-Formación en el tema -Ejercicios o prácticas realizadas
Propuesta	-Planes, protocolos o herramientas implementadas a nivel municipal
Recuperación	-Planes, protocolos o herramientas implementadas a nivel municipal
Ejes transversales	-Incorporación del enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Integral del Riesgo de Desastre

Nota: Los componentes corresponden a los Ejes Estratégicos implementados en el Manual de Referencia para la Intervención Territorial en Gestión Integral del Riesgo de Desastres (2019).

En un primer momento se realizó un pilotaje, el cual se llevó a cabo en tres municipios del Departamento de Guatemala que, de acuerdo a la información recopilada de fuentes primarias, presentaron rasgos y elementos en común: (población, territorio, economía, cultura, etc.) (Vega-Cuza, 2012); siendo estos: Villa Canales, Amatitlán y Santa Catarina Pinula. Dicho proceso estuvo a cargo de 5 personas de la Dirección de Preparación de la SE-CONRED.

En un segundo momento, esta herramienta fue implementada por el personal de las sedes regionales y del Departamento de Fortalecimiento al Sistema CONRED, mediante un tipo de muestreo aleatorio simple de 38 municipios priorizados por la herramienta INFORM GT8, en las 5 regiones establecidas por la Secretaría Ejecutiva de CONRED con un margen de error del 10.60 %, pasando un total de 42 encuestas.

Como se abordó en el apartado anterior para el desarrollo del diagnóstico fue requerido el uso de la herramienta metodológica de "análisis de comportamientos CAP" (Vega-Cuza, 2012), a partir de la cual se definieron indicadores enmarcados dentro de cada categoría de análisis de los procesos de la Gestión del Riesgo, Prevención, Mitigación, Preparación, Respuesta y Recuperación⁹.

Resultados Obtenidos

A continuación se presenta la distribución de los resultados obtenidos por medio de la técnica de análisis de contenidos. Se presentan las respuestas ubicadas dentro de las categorías definidas para cada componente.



Discusión de Resultados

Los componentes de la herramienta así como la categorización de las unidades de análisis obtenidas permitieron determinar las diferentes tendencias de las respuestas proporcionadas por los participantes del estudio. En el componente de conocimiento del riesgo se pudo observar que existe dispersión sobre las fuentes de información fidedignas que puedan presentar datos sobre registros históricos de desastres a nivel municipal.

Para el análisis del riesgo se toma como referencia la experiencia y conocimiento de los líderes comunitarios, los integrantes de los COCODES, integrantes de las COLRED/COMRED.

El medio principal para la identificación del riesgo es a través de mapeos locales o municipales en los archivos de las instituciones municipales, autoridades locales o comunitarias. En la mayoría de casos la principal fuente de información para el monitoreo de fenómenos peligrosos son los boletines, avisos, recomendaciones e información compartido por CONRED y el INSIVUMEH.

En el componente de Prevención y mitigación se evidencia falta de conocimiento sobre los proyectos municipales que se implementan, en especial los relacionados con la planificación a nivel territorial. En su mayoría se desconoce sobre acciones realizadas para la GRRD10 en los municipios.

Así también mencionar que en su mayoría se indica que no existe presupuesto para la prevención y mitigación del riesgo de desastres en el municipio.

En el componente de preparación, se observa la carencia de capacitaciones o cursos para la respuesta en situaciones de emergencia o desastre. Se evidencia como prioridad la planificación, las actividades de simulaciones y simulacros, sin embargo existe desconocimiento de acciones concretas que se promuevan a nivel municipal.

En el componente de respuesta, en forma generalizada se evidencia que la principal acción al momento de situaciones RED11 es la activación del COEM12 para dar inicio con la coordinación interinstitucional. En su mayoría se identifica la activación de COEM como primer punto, después se vuelve evidente la dispersión en cuanto a las acciones que se deben realizar al momento de la respuesta humanitaria. En el componente de recuperación la principal acción identificada es la evaluación de daños que realizan las instituciones con presencia en el municipio, sin embargo existe un desconocimiento sobre planes, herramientas o protocolos para la recuperación a nivel municipal.

Se puede observar la percepción generalizada que no hay recursos municipales disponibles específicamente para la recuperación.

Finalmente en el componente de ejes transversales para la gestión integral para la reducción del riesgo a nivel municipal la percepción indica un desconocimiento en cuanto a las estrategias y acciones para la incorporación del enfoque de discapacidad, género y NNA¹³.

Tabla 2

Respuestas integradas en categorías según su contenido en el componente de: Conocimiento del riesgo

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Fuentes de información reconocidas, actualizadas y de acceso público	12	114

Tabla 2.1

Respuestas integradas en categorías según su contenido en el componente de: Conocimiento del riesgo

CATEGORIA	PRÁCTICAS EMPIRICAS	CONOCIMIENTO TÉCNICO CIENTÍFICO	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Análisis de Riesgo	150	33	27

Tabla 2.2

Respuestas integradas en categorías según su contenido en el componente de: Conocimiento del riesgo

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Capacidad técnico-científica	15	69

Tabla 3

Respuestas integradas en categorías según su contenido en el componente de: Prevención y mitigación

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Planes, proyectos y/o campañas	15	153

Tabla 3.1

Respuestas integradas en categorías según su contenido en el componente de: Prevención y mitigación

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Recursos Municipales Disponibles	3	81

Tabla 4

Respuestas integradas en categorías según su contenido
en el componente de: Preparación

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Formación en el tema	10	116

Tabla 4.1

Respuestas integradas en categorías según su contenido
en el componente de: Preparación

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Ejercicios o prácticas realizadas	6	78

Tabla 5

Respuestas integradas en categorías según su contenido
en el componente de: Respuesta

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Planes, protocolos o herramientas definidas a nivel municipal	68	184

Tabla 6

Respuestas integradas en categorías según su contenido
en el componente de: Recuperación

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Planes, protocolos o herramientas definidas a nivel municipal	8	160

Tabla 7

Respuestas integradas en categorías según su contenido en
el componente de: Ejes transversales para la gestión integral
para la reducción del riesgo a nivel municipal

CATEGORIA	AFIRMACIONES	NEGACIONES O DESCONOCIMIENTO
Incorporación del enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Integral del Riesgo de Desastre	5	121

Conclusiones

Se cuenta con limitadas capacidades técnico-científicas para la identificación, análisis y evaluación del riesgo de desastres a nivel municipal. Esto repercute en la disponibilidad de datos e información actualizada para profundizar en el conocimiento del riesgo en el territorio.

La gestión municipal carece de planes o proyectos con enfoque de prevención y mitigación en el marco de la gestión integral del riesgo de desastres, aumentando el índice de riesgo y favoreciendo el aumento de vulnerabilidades.

El enfoque de preparación en la gestión municipal se limita a cursos y capacitaciones esporádicas sobre el tema, reduciendo las capacidades de respuesta al momento de un evento de emergencia o desastre.

El conocimiento sobre la respuesta ante emergencias o desastres se debe a la experiencia previa de los actores del Sistema CONRED en el nivel municipal, hecho que reduce la capacidad de gestión al momento de ser requerida. La recuperación posterior a un evento de emergencia o desastre carece del soporte de los protocolos establecidos y socializados por la SE-CONRED.

Recomendaciones

Se recomienda al sistema CONRED:

Idear y ejecutar los medios para ampliar las capacidades de identificación, análisis y evaluación del riesgo de desastres a nivel municipal, así como la organización interinstitucional respecto al manejo de bases de datos y registros históricos de desastres.

Desarrollar procesos formativos para el fortalecimiento a nivel municipal sobre planes, herramientas y proyectos existentes con enfoque de prevención y mitigación del riesgo de desastres.

Promover y fortalecer procesos formativos relacionados a los planes, protocolos y herramientas existentes en el sistema CONRED, en especial: Plan Nacional de Respuesta.

Promover y fortalecer procesos formativos relacionados a los planes, protocolos y herramientas existentes para la recuperación posterior al impacto de un evento.

- | | |
|---|---|
| 1 Decreto legislativo 109-96. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. | 7 Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres en Guatemala. SE-CONRED. 2011. |
| 2 Manual de procedimiento internos para los departamentos que componen la Dirección de Preparación de la Secretaría Ejecutiva de CONRED. | 8 Index for Risk Management –INFORM-. Herramienta de Naciones Unidas en el nivel sub nacional. |
| 3 Glosario de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 201. | 9 Conceptos ubicados en el Glosario de Gestión Integral de Riesgo a Desastres. 2018. |
| 4 Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. | 10 Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastres. |
| 5 Manual de Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres en los procesos de Desarrollo Municipal. SE-CONRED. 2015. | 11 Riesgo, Emergencia y Desastre. |
| 6 ONU: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (5 marzo 2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 2015-2030. | 12 Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. |
| | 13 Niños, Niñas y Adolescentes. |
-



Fotografía propiedad de Mapa en Relieve de Guatemala

Referencias Bibliográficas

- Aguilar, M. y Ander-Egg, E. (1999). Diagnóstico Social: Conceptos y Metodología. (2º Ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Lumen Hvmanitas.
- De Robertis, C. (2006). Metodología de la intervención en Trabajo Social. (1º Ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Lumen Hvmanitas.
- Gellert, Gisela y Gamarra, Luis. La trama y del drama de los desastres. Dos estudios a diferente escala sobre la problemática de los desastres en Guatemala. FLACSO. Guatemala. 2003.
- Glosario de Gestión Integral de Riesgo a Desastres. SE-CONRED. 2018.
- Manual para la Organización de Coordinadoras para la Reducción de Desastres. SE-CONRED. 2015.
- ONU: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (5 marzo 2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 2015-2030.
- Vega-Cuza, I. (2012). Bases Conceptuales De Una Metodología para el Diagnóstico Situacional con Fines de Gestión de Riesgo de Desastres. Santiago de Cuba, Cuba: Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba.



Gerardo Emanuel Narciso Pineda es el encargado del Departamento de Fortalecimiento al Sistema CONRED en la Dirección de Preparación. Posee una maestría en Antropología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Juan José Cifuentes López es actual Asesor en el Departamento de Fortalecimiento al Sistema CONRED. Licenciado en Ciencias Psicológicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, además cuenta con una Maestría Artium en liderazgo y emprendimiento en la Universidad de San Pablo.



*Copyright (c) Gerardo Emanuel Narciso Pineda,
(c) Juan José Cifuentes López*





Sobre la Revista Académica Seguridad y Estrategia

*About the Academic Magazine
Security and Strategy*





Fotografía propiedad de Ekrulila

Sobre la Revista

Seguridad y Estrategia es una revista de acceso totalmente abierto, en virtud de que todos sus artículos están disponibles en Internet para todos los lectores desde el momento de su publicación.

Todos los usuarios tienen libre acceso de forma gratuita a los artículos de investigación publicados en la Revista Seguridad y Estrategia, de forma global, sin restricciones de espacio.

El acceso abierto permite mayor visibilidad y número de lectores de las contribuciones publicadas, además de agilizar el proceso de publicación.

Es importante mencionar que los autores conservan en todo momento sus derechos de autor sobre sus contribuciones publicadas. Las políticas de derecho de autor suponen la condición de cita del autor o autores de cualquier contenido reproducido total o parcialmente, siempre que esta no busque fines comerciales; es así que se reconoce la propiedad intelectual del o los autores y del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES- como entidad editora.

Cabe resaltar que la Revista Seguridad y Estrategia no solicita pagos a los autores por el proceso editorial o por publicar sus artículos, ni a los lectores por el acceso a la información académica que se encuentra en la plataforma digital.

Proceso de Indexación en Latindex

La Revista Académica Seguridad y Estrategia del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, se encuentra en proceso de indexación en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX).

Presentación de Escritos

Los trabajos que se remitan para su publicación deberán ser originales, inéditos y no estar postulados de forma simultánea para su publicación en otras revistas u órganos

editoriales o en línea, además de que los autores asumen la responsabilidad si se detecta falsificación de datos o falta de autenticidad en la investigación.

Cada artículo tendrá una extensión máxima de 4 páginas para tesis o trabajos de graduación de maestría, 6 -12 páginas para otros estudios y 8-10 para tesis de doctorado, entre 3,000 a 3,500 caracteres cada artículo a doble columna.

Sobre el Sistema de Cita

Sistema de citas APA (American Psychological Association). Con la finalidad de impedir el plagio y la copia indiscriminada del contenido de otros textos, el autor citará correctamente las fuentes empleadas en su trabajo, proponiéndose el empleo del modelo diseñado por la Asociación Americana de Psicología (APA).

Tipo de Artículo

Podrá presentarse artículos cuyo texto sea en idioma español y dentro de la categoría y estructura siguiente.

Proceso de Dictaminación

Todos los trabajos se someten a dos etapas de dictaminación: Una primera lectura por parte del personal que labora en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

En caso de ser aceptado, se traslada al Consejo Editorial, con el objetivo de verificar si cubre con los requisitos del perfil de la revista.

Durante todo el proceso se conservará el anonimato tanto de los dictaminadores como de los autores.

En el caso de discrepancia entre el aceptado y rechazado, el texto será enviado a un tercer dictaminador, cuya decisión definirá su estatus de publicación, en este caso. El dictamen final es inapelable.

Artículo Académico

- Resumen
- Abstract
- Palabras Clave
- Key Words
- Introducción
- Desarrollo del Estudio
- Resultados Obtenidos
- Discusión de Resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Información del Autor

Contacto

Coronel y Magíster

Jorge Francisco Girón Mendizabal

Director General INEES

Correo: revista@inees.gob.gt

Tel: +502 2496-2900

Versión Electrónica

www.inees.gob.gt/revistas/



*Copyright (c) Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad -INEES-*



